



GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

www.imprenta.gov.co

ISSN 0123 - 9066

AÑO XXXIV - Nº 279

Bogotá, D. C., jueves, 13 de marzo de 2025

EDICIÓN DE 30 PÁGINAS

DIRECTORES:

DIEGO ALEJANDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO GENERAL DEL SENADO

www.secretariassenado.gov.co

JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA

SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA

www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PROYECTOS DE LEY

PROYECTO DE LEY NÚMERO 524 DE 2025 CÁMARA

por medio del cual se establece el Sistema Integrado de Control de exenciones del 4x1000 y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, D. C., 26 de febrero de 2025

Doctor

DIEGO ALEJANDRO GONZÁLEZ

Secretario General

Senado de la República.

Asunto: Radicación de proyecto de ley, *por medio del cual se establece el sistema integrado de control de exenciones del 4x1000 y se dictan otras disposiciones.*

Doctor González:

De manera atenta y en consideración de los artículos 139 y 140 de la Ley 5ª de 1992 presento al Senado de la República el Proyecto de Ley, *por medio del cual se establece el Sistema integrado de control de exenciones del 4x1000 y se dictan otras disposiciones*, iniciativa legislativa que cumple con las disposiciones correspondientes al orden de redacción consagrado en el artículo 145 de la citada ley.

Agradezco disponer el trámite legislativo previsto en el artículo 144 de la Ley 5ª de 1992 respecto del siguiente proyecto.

Cordialmente,

ANTONIO JOSÉ CORREA JIMÉNEZ
Senador de la República

PROYECTO DE LEY NÚMERO 524 DE 2025 CÁMARA

por medio del cual se establece el Sistema Integrado de Control de exenciones del 4x1000 y se dictan otras disposiciones.

ARTÍCULO 1º. OBJETO. La presente ley tiene por objeto la implementación de las exenciones al impuesto del 4x1000, estableciendo un sistema integrado de monitoreo y control que permita garantizar su aplicación eficiente, equitativa y transparente, asegurando que a los contribuyentes beneficiarios se les respete este derecho dentro de los límites establecidos por la ley.

ARTÍCULO 2º. CREACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE EXENCIONES (SICE). Créase el Sistema Integrado de Control de Exenciones (SICE), administrado por la Dirección

de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que consolidará y centralizará la información de todas las transacciones bancarias de los contribuyentes, con el fin de verificar el cumplimiento de los topes del que trata el artículo 65 de la Ley 2277 de 2022, de exención del 4x1000 y garantizar la correcta aplicación del beneficio en todas las cuentas del usuario.

Parágrafo. Conforme a lo establecido en el artículo 65 de la Ley 2277 de 2022 anualmente, el sistema actualizará automáticamente el límite para la exención del 4x1000 e identificará aquellos contribuyentes que lo excedan, en aras de autorizar el cobro del impuesto.

ARTÍCULO 3°. OBLIGACIÓN DE CONEXIÓN AL SICE. Las entidades financieras y/o cooperativas de ahorro y crédito, deberán integrarse al SICE y reportar en tiempo real la información transaccional de sus clientes, de acuerdo con los lineamientos técnicos que establezca la DIAN.

Parágrafo. La DIAN establecerá los plazos y condiciones para la integración de las entidades financieras al SICE, en un término de (6) meses a partir de la promulgación de la presente ley.

ARTÍCULO 4°. FONDO DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA. Créase el Fondo de Modernización Tecnológica, el cual será administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, destinado a apoyar la actualización tecnológica de las entidades financieras para su integración al SICE. La Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Economía Solidaria, serán las responsables de supervisar la ejecución y el destino de los recursos asignados, garantizando que sean utilizados conforme a los objetivos de modernización tecnológica establecidos por esta ley. Este fondo será financiado mediante el 100% de las multas recaudadas por incumplimiento de las disposiciones relacionadas con el 4x1000.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Hacienda presentará informes semestrales a la Superintendencia Financiera sobre la gestión de los recursos del fondo, con el fin de asegurar una adecuada supervisión y control.

Parágrafo 2°. Además del 100% de las multas, el fondo podrá financiarse a través de:

1. Aportes extraordinarios del Presupuesto General de la Nación.
2. Recursos provenientes de convenios de cooperación con organismos multilaterales.

ARTÍCULO 5°. SUPERVISIÓN Y CONTROL PERMANENTE. La DIAN, en colaboración con la Superintendencia Financiera y Superintendencia de Economía Solidaria, realizará inspecciones cada tres (3) para garantizar la correcta implementación del SICE y el cumplimiento de las disposiciones de esta ley. Las entidades financieras y cooperativas, deberán facilitar el acceso a la información y prestar colaboración plena durante dichas inspecciones.

ARTÍCULO 6°. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. El tratamiento de la información de los contribuyentes deberá cumplir con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales. Ningún dato recopilado para el funcionamiento del SICE podrá ser usado con fines distintos a los previstos en esta ley, so pena de las investigaciones y sanciones que correspondan. Las faltas por el incumplimiento de esta protección serán consideradas muy graves para la imposición de multas.

ARTÍCULO 7°. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. Las entidades financieras que no cumplan con la obligación de conectarse al SICE dentro de los plazos establecidos, o que presenten inconsistencias en la información suministrada, serán sancionadas con multas equivalentes a:

1. **Faltas leves:** 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).
2. **Faltas graves:** 5.000 SMLMV.
3. **Faltas muy graves o reincidencias:** 7.000 SMLMV.

Las entidades financieras deberán reportar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cada tres (3) meses la actualización realizada por ellos en la plataforma SICE.

Parágrafo. Los recursos provenientes de estas sanciones serán destinados en su totalidad al Fondo de Modernización Tecnológica, según lo establecido en el artículo 4° de la presente ley.

ARTÍCULO 8°. PEDAGOGÍA CIUDADANA. El Ministerio de Hacienda, en coordinación con la DIAN, realizará campañas educativas para informar a los ciudadanos sobre sus derechos relacionados con el 4x1000, incluyendo la correcta aplicación de las exenciones, fomentando a su vez la inclusión financiera, dichas campañas deberán iniciar tres (3) meses después de la promulgación de la presente ley.

ARTÍCULO 9°. EVALUACIÓN Y REPORTE ANUAL. La DIAN deberá presentar anualmente a las Comisiones Terceras de Senado y Cámara de Representantes del Congreso de la República un informe detallado sobre la implementación del SICE, las estadísticas de aplicación de la exención del 4x1000, los avances en inclusión financiera, los recaudos por sanciones y multas y su destinación.

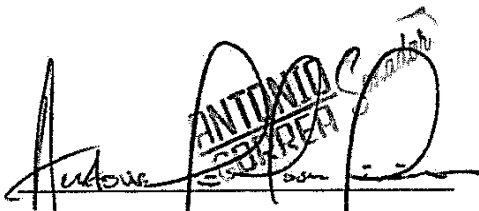
ARTÍCULO 10. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Se establecerá un comité especial en el Ministerio de Hacienda para atender las controversias derivadas de la implementación del SICE. Este comité estará integrado por representantes de la DIAN, la Superintendencia Financiera y un representante de todas las entidades financieras el cual será elegido por estas y podrá cambiar anualmente.

ARTÍCULO 11. CAPACITACIÓN PARA PERSONAL FINANCIERO. Se implementarán programas de capacitación obligatoria para el personal de las entidades financieras sobre el uso y

la gestión del SICE, con el objetivo de minimizar errores operativos y garantizar la eficiencia del sistema.

ARTÍCULO 12. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Cordialmente,



ANTONIO JOSÉ CORREA JIMÉNEZ
Senador de la República

PROYECTO DE LEY NÚMERO 524 DE 2025
CÁMARA

por medio del cual se establece el Sistema Integrado de Control de exenciones del 4x1000 y se dictan otras disposiciones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente exposición de motivos, del proyecto de ley por el cual se crea la Plataforma de Monitoreo Transfronterizo para el fortalecimiento de la seguridad, la cooperación internacional y la gestión sostenible de los recursos en las zonas de frontera de Colombia, tendrá como columna vertebral en esta exposición de motivos, (I) Objeto del proyecto, (II) Consideraciones, (III) Antecedentes, (IV) Marco constitucional y legal, (V) Conflictos de intereses y (VI) Impacto fiscal.

I. OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto de ley busca fortalecer la implementación de las exenciones al impuesto del 4x1000 mediante la creación del Sistema Integrado de Control de Exenciones (SICE). Este sistema garantizará una correcta aplicación de las exenciones, asegurando eficiencia, equidad y transparencia en el acceso a este beneficio tributario.

El control deficiente sobre las exenciones del 4x1000 ha generado inequidades y dificultades operativas para los contribuyentes. Muchos usuarios encuentran barreras administrativas para acceder a sus derechos, mientras que la ausencia de una base centralizada de datos impide un monitoreo adecuado del cumplimiento de los límites legales establecidos en el artículo 65 de la Ley 2277 de 2022. En consecuencia, el proyecto de ley responde a la necesidad de optimizar la supervisión y control de estas exenciones, evitando errores en la aplicación del beneficio y promoviendo una mayor inclusión financiera.

Además, la implementación de un fondo de modernización tecnológica permitirá que las entidades financieras puedan actualizar sus sistemas para una integración efectiva al SICE, evitando costos adicionales que pudieran trasladarse a los usuarios del sistema financiero.

II. CONSIDERACIONES

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido como el 4x1000, ha sido una de las fuentes de ingresos fiscales más importantes del Estado colombiano. Desde su creación, este impuesto ha desempeñado un papel crucial en la estabilización del sistema financiero nacional, especialmente en momentos de crisis económica. Su relevancia radica en la capacidad de generar ingresos de forma continua y estable, lo que ha permitido al Estado financiar programas sociales, atender emergencias económicas y garantizar el funcionamiento de diversas instituciones públicas.

A lo largo de los años, el 4x1000 ha generado debates sobre su impacto en la equidad del sistema tributario. Aunque su recaudación ha sido fundamental para el sostenimiento fiscal, se le ha criticado por su carácter regresivo, dado que afecta de manera proporcional a todos los contribuyentes, sin considerar su capacidad económica. Esto ha generado discusiones sobre la necesidad de introducir mecanismos que aseguren un tratamiento más equitativo y que permitan una mejor distribución de la carga tributaria.

Con respecto a esta situación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha reconocido la importancia de mejorar los mecanismos de control del GMF para evitar que quienes poseen múltiples cuentas se beneficien desproporcionadamente de las exenciones establecidas. En este sentido, la DIAN ha trabajado en el desarrollo de una plataforma integral basada en la gestión eficiente de datos para optimizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y fortalecer el control fiscal. Esta plataforma busca la obtención, custodia, análisis y uso inteligente de los datos con el fin de facilitar el cumplimiento tributario y mejorar la supervisión de las transacciones exentas. Como lo señala el “Diseño Ejecutivo del Nuevo Sistema de Gestión Tributaria” de la DIAN:

*“El centro del concepto de la plataforma se basa en los datos y su gestión (Data driven design), en el cual la plataforma está orientada a la obtención, custodia, análisis, transformación y uso inteligente de los datos en los procesos misionales, tanto para fines de **facilitar al contribuyente el cumplimiento oportuno de sus obligaciones como de control tributario**”.* (Negrillas fuera de texto).

Por otra parte, la ausencia de un sistema tecnológico eficiente que garantice la correcta aplicación de las exenciones ha derivado en desigualdades en su aplicación. La DIAN ha identificado la necesidad de compilar y sistematizar la información de los beneficios tributarios vigentes, con el fin de mejorar la calidad de la información reportada y optimizar las labores de análisis y control del sistema tributario. Asimismo, se ha resaltado la importancia de garantizar un acceso equitativo a los beneficios fiscales para todos los contribuyentes, evitando prácticas que puedan generar distorsiones

en el recaudo. Como se menciona en el portal sobre Beneficios Tributarios de la DIAN:

“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, consciente de la trascendencia de la figura de los beneficios tributarios, ha identificado la necesidad de contribuir a la generación de conocimiento de este tipo de figuras con miras a facilitar la planeación tributaria de los contribuyentes, mejorar la calidad de la información reportada en los formularios y servicios informáticos de la entidad u ofrecer mayores elementos para las labores de análisis, control o investigación del sistema tributario y la política fiscal del país” (DIAN).

Además, se ha identificado que la falta de integración tecnológica incrementa los costos de transacción y dificulta el acceso equitativo a los beneficios tributarios. Esto afecta principalmente a los contribuyentes con múltiples productos financieros en diferentes entidades bancarias, lo que refuerza la necesidad de implementar un sistema que centralice la información y garantice el acceso equitativo a los beneficios del GMF.

Frente a estos desafíos, surge la necesidad de crear el Sistema Integrado de Control de Exenciones (SICE). Este sistema, liderado por la DIAN, tiene como propósito consolidar y centralizar la información de las transacciones bancarias de los contribuyentes, lo que permitirá verificar el cumplimiento de los topes establecidos en el artículo 65 de la Ley 2277 de 2022, garantizando la correcta aplicación de las exenciones en todas las cuentas del usuario. Según lo dispuesto en dicha normativa:

“Las entidades financieras y/o cooperativas de naturaleza financiera o de ahorro y crédito vigiladas por las Superintendencias Financiera o de Economía Solidaria que administren o en las que se abran cuentas de ahorro, depósitos electrónicos o tarjetas prepago deberán adoptar un sistema de información que permita la verificación, control y retención del Gravamen a los Movimientos Financieros en los términos del artículo 879 del Estatuto Tributario. De esta forma, se permitirá aplicar la exención de trescientos cincuenta (350) UVT mensuales, señalada en el numeral 1 del artículo 879 del Estatuto Tributario, sin la necesidad de marcar una única cuenta”. (Negritas fuera de texto).

El desarrollo del SICE se enmarca dentro de los esfuerzos del Gobierno nacional por modernizar y fortalecer la administración tributaria, permitiendo la supervisión efectiva de las transacciones bancarias sujetas a exenciones. En este sentido, la DIAN ha planteado la necesidad de avanzar en la digitalización y en la interoperabilidad de los sistemas de información con el sector financiero para mejorar la transparencia y equidad en la aplicación de los beneficios fiscales.

Para el establecimiento de las sanciones se tuvieron en cuenta las siguientes fórmulas:

El 5% de 4.6 billones de pesos equivale a 230,000 millones de pesos.

El 1% de 4.6 billones de pesos equivale a **46,000 millones de pesos**.

200,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) en Colombia equivalen a **\$284,700,000,000 COP**.

- 7,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) en Colombia equivalen a **nueve mil novecientos sesenta y cuatro millones quinientos mil pesos**.

- 5,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) en Colombia equivalen a **siete mil ciento diecisiete millones quinientos mil pesos**.

- 2,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) en Colombia equivalen a **dos mil ochocientos cuarenta y siete millones de pesos**.

III. ANTECEDENTES

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) fue creado en Colombia mediante el Decreto número 2331 de 1998, expedido bajo la emergencia económica declarada para enfrentar la crisis financiera de esa época. Inicialmente, se estableció con una vigencia temporal hasta el 31 de diciembre de 1999 y tenía como propósito “preservar la estabilidad y la solvencia del sistema y proteger a sus usuarios” (Corte Constitucional, Sentencia C-122 de 1999). La tarifa inicial del gravamen fue de 1.2x1000 y 2x1000 sobre ciertas transacciones financieras.

Posteriormente, el Decreto número 258 de 1999 destinó la recaudación del impuesto a la atención del desastre en el Eje Cafetero tras el terremoto de 1999. En consecuencia, la Ley 508 de 1999 prorrogó la vigencia del GMF hasta el 31 de diciembre de 2000 con el objetivo de financiar la reconstrucción de la zona afectada.

En el año 2000, la Ley 608 mantuvo el GMF con una tarifa del 2x1000, aún con carácter temporal, aplicable hasta diciembre de 2000. Sin embargo, a finales del mismo año, la Ley 633 convirtió este tributo en un impuesto permanente, elevando la tarifa al 3x1000 a partir del 1° de enero de 2001. Esta decisión se justificó en la necesidad de contar con recursos fiscales estables para atender emergencias económicas y financiar el gasto público.

En 2006, la Ley 1111 modificó el GMF, aumentando la tarifa al 4x1000 a partir del 1° de enero de 2007 y estableciendo que el 25% del impuesto pagado sería deducible del impuesto de renta, lo que significó un alivio parcial para ciertos contribuyentes.

Durante los años 2011 a 2020, surgieron nuevas iniciativas para modificar el GMF. En 2014, la Ley 739 planteó un desmonte gradual del tributo, estableciendo que la tarifa se reduciría al 3x1000 en 2019, al 2x1000 en 2020, al 1x1000 en 2021 y se eliminaría completamente en 2022. No obstante, esta reforma fue revertida con la expedición de la Ley 1819 de 2016, la cual mantuvo la tarifa del

4x1000 a partir de 2017 en adelante, dejando sin efecto el plan de desmonte progresivo.

Entre 2017 y 2020, se presentaron múltiples iniciativas en el Congreso para modificar el GMF, incluyendo propuestas de reducción, eliminación parcial y ampliación de exenciones. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas prosperó debido a las implicaciones fiscales que implicaba su eliminación, ya que el GMF representaba una fuente significativa de ingresos para el Estado.

Finalmente, la Ley 2277 de 2022 introdujo el artículo 65, una disposición clave para modernizar el sistema de exenciones del GMF. Este artículo establece que:

“Las entidades financieras y/o cooperativas de naturaleza financiera o de ahorro y crédito vigiladas por las Superintendencias Financiera o de Economía Solidaria que administren o en las que se abran cuentas de ahorro, depósitos electrónicos o tarjetas prepago deberán adoptar un sistema de información que permita la verificación, control y retención del Gravamen a los Movimientos Financieros en los términos del artículo 879 del Estatuto Tributario. De esta forma, se permitirá aplicar la exención de trescientos cincuenta (350) UVT mensuales, señalada en el numeral 1 del artículo 879 del Estatuto Tributario, sin la necesidad de marcar una única cuenta”.

El párrafo transitorio del artículo indica que “lo dispuesto entrará en aplicación cuando se desarrolle el sistema de información correspondiente por parte de las entidades vigiladas, a más tardar, a los dos (2) años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. Hasta tanto el sistema de información no se encuentre en funcionamiento, se continuará aplicando lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 879 del Estatuto Tributario”.

Hasta la fecha, la falta de implementación de esta plataforma tecnológica ha impedido la aplicación efectiva del beneficio contemplado en la ley. Esta ausencia de infraestructura ha generado ineficiencias en el control de las exenciones, causando desigualdades y debilitando la confianza pública en el sistema tributario.

Este relato histórico evidencia cómo el GMF, concebido originalmente como una medida temporal, evolucionó hasta convertirse en un tributo permanente de gran relevancia fiscal. A pesar de intentos de desmontarlo, su consolidación ha sido una fuente estable de ingresos para el país. Las distintas iniciativas legislativas y los desafíos tecnológicos actuales refuerzan la necesidad de implementar el Sistema Integrado de Control de Exenciones (SICE), garantizando una aplicación equitativa, transparente y eficiente del gravamen en beneficio de todos los contribuyentes.

IV. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL

El presente proyecto de ley se sustenta en un marco (I) legal, constitucional y (II) jurisprudencial.

Frente al marco (I) legal y constitucional tenemos:

- **Artículo 338 de la Constitución Política de Colombia:** Establece que la ley puede otorgar exenciones y beneficios tributarios, regulando las condiciones en que estos pueden aplicarse. La creación del SICE garantizará el cumplimiento de las condiciones de exención establecidas en la legislación vigente.

- **Ley 2277 de 2022, artículo 65:** Regula las exenciones del impuesto del 4x1000, fijando límites y requisitos para su aplicación. La implementación del SICE facilitará la verificación de estos requisitos.

- **Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos Personales):** Fundamenta la obligación de que el SICE garantice la confidencialidad y correcto tratamiento de la información de los contribuyentes.

- **Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011):** Establece los principios de eficiencia y transparencia en la administración pública, los cuales sustentan la necesidad de un sistema centralizado de control tributario.

- **Estatuto Tributario, artículo 871 y siguientes:** Regula el impuesto del 4x1000 y sus excepciones.

Frente al marco (II) Jurisprudencial tenemos:

- Sentencia C-1015 de 2008: La Corte Constitucional indicó que el 4x1000 tiene una finalidad fiscal legítima, pero que su aplicación debe respetar los derechos de los contribuyentes. El SICE contribuirá a garantizar que las exenciones sean aplicadas sin vulnerar derechos fundamentales.

- Sentencia C-776 de 2003: La Corte señaló la importancia de la equidad tributaria y la necesidad de que los mecanismos de exención sean accesibles y aplicados de manera efectiva. La creación del SICE fortalece este principio al eliminar barreras burocráticas.

- Sentencia C-690 de 2003: Se reafirma la competencia del legislador para establecer mecanismos de control y supervisión tributaria, en la medida en que estos no afecten el núcleo esencial de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

- Sentencia C-741 de 2003: Reitera la obligación del Estado de garantizar la transparencia y el acceso equitativo a los beneficios tributarios.

V. IMPACTO FISCAL

Frente al artículo 7º Análisis del impacto fiscal de las normas de la Ley 819 de 2003, *por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones*, la Honorable Corte Constitucional se pronunció sobre su interpretación de la siguiente manera en la Sentencia C-502 de 2007:

“36. Por todo lo anterior, la Corte considera que los primeros tres incisos del art. 7º de la Ley 819 de 2003 deben entenderse como parámetros de racionalidad de la actividad legislativa, y

como una carga que le incumbe inicialmente al Ministerio de Hacienda, una vez que el Congreso ha valorado, con la información y las herramientas que tiene a su alcance, las incidencias fiscales de un determinado proyecto de ley. Esto significa que ellos constituyen instrumentos para mejorar la labor legislativa. Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda. Y en ese proceso de racionalidad legislativa la carga principal reposa en el Ministerio de Hacienda, que es el que cuenta con los datos, los equipos de funcionarios y la experticia en materia económica. Por lo tanto, en el caso de que los Congresistas tramiten un proyecto incorporando estimativos erróneos sobre el impacto fiscal, sobre la manera de atender esos nuevos gastos o sobre la compatibilidad del proyecto con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, le corresponde al Ministro de Hacienda intervenir en el proceso legislativo para ilustrar al Congreso acerca de las consecuencias económicas del proyecto. Y el Congreso habrá de recibir y valorar el concepto emitido por el Ministerio.

No obstante, la carga de demostrar y convencer a los Congresistas acerca de la incompatibilidad de cierto proyecto con el Marco Fiscal de Mediano Plazo recae sobre el Ministro de Hacienda.

Por otra parte, es preciso reiterar que, si el Ministerio de Hacienda no participa en el curso del proyecto durante su formación en el Congreso de la República, mal puede ello significar que el proceso legislativo se encuentra viciado por no haber tenido en cuenta las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003. Puesto que la carga principal en la presentación de las consecuencias fiscales de los proyectos reside en el Ministerio de Hacienda, la omisión del Ministerio en informar a los Congresistas acerca de los problemas que presenta el proyecto no afecta la validez del proceso legislativo ni vicia la ley correspondiente”.

Como lo ha resaltado la Corte, si bien compete a los miembros del Congreso la responsabilidad de estimar y tomar en cuenta el esfuerzo fiscal que el proyecto bajo estudio puede implicar para el erario público, es claro que es el Poder Ejecutivo, y al interior de aquel, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el que dispone de los elementos técnicos necesarios para valorar correctamente ese impacto, y a partir de ello, llegado el caso,

demostrar a los miembros del órgano legislativo la inviabilidad financiera de la propuesta que se estudia. En consecuencia, sin perjuicio de que el Proyecto de Ley continúe su trámite en el Senado de la Republica.

VI. CONFLICTO DE INTERESES

El presente proyecto de ley no presenta conflictos de intereses por parte del proponente. Se declara que no existen vínculos personales, familiares, económicos o comerciales que puedan influir o comprometer la objetividad, imparcialidad e independencia en la formulación de la presente iniciativa legislativa.

El propósito de este proyecto es exclusivamente de interés público, orientado a mejorar la eficiencia, equidad y transparencia en la aplicación del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido como el 4x1000. La creación del Sistema Integrado de Control de Exenciones (SICE) tiene como fin garantizar un acceso equitativo a las exenciones tributarias y reducir las desigualdades derivadas de la falta de un sistema tecnológico unificado.

Además, se aclara que la propuesta no favorece directa o indirectamente a ninguna entidad financiera o contribuyente en particular, ni persigue beneficios personales o sectoriales. La formulación de este proyecto responde a las recomendaciones y lineamientos establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Banco de la República y la Superintendencia Financiera de Colombia, cuyos informes públicos respaldan la necesidad de implementar mecanismos tecnológicos para el control eficiente de las exenciones del 4x1000.

PONENCIAS

INFORME DE PONENCIA POSITIVA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 409 DE 2024 CÁMARA.

por medio de la cual se modifica la Ley 906 de 2004, se reglamenta la garantía procesal de doble conformidad judicial, se regula el recurso de impugnación especial y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, D. C., 11 de marzo de 2025.

Honorable Representante

ANA PAOLA GARCÍA SOTO

Presidenta Comisión Primera Constitucional

Cámara de Representantes.

Referencia: Informe de ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 409 de 2024 Cámara.

Honorable Representante,

De conformidad con la designación realizada por la Honorable Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, rindo **Informe de PONENCIA POSITIVA para Primer Debate del Proyecto de Ley número 409 de 2024 Cámara**, por medio de la cual se modifica la Ley 906 de 2004, se reglamenta la garantía procesal de doble conformidad judicial, se regula el recurso de impugnación especial y se dictan otras disposiciones.

Atentamente,



ALIRIO URIBE MUÑOZ

Ponente Único

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 409 DE 2024 CÁMARA

por medio de la cual se modifica la Ley 906 de 2004, se reglamenta la garantía procesal de doble conformidad judicial, se regula el recurso de impugnación especial y se dictan otras disposiciones.

1. OBJETO DEL PROYECTO

La presente iniciativa tiene por objeto positivizar y reglamentar el recurso de impugnación especial para salvaguardar la garantía de acceso a la doble conformidad judicial propia del derecho al debido proceso en materia penal, en obediencia a los mandatos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional

colombiana y en atención a las condiciones previamente desarrolladas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para su trámite.

2. ANTECEDENTES

El mecanismo procesal para garantizar la doble conformidad judicial no se ha integrado aún al ordenamiento jurídico colombiano y representa un rezago normativo que no ha sido atendido por el Congreso de la República a pesar de que desde 2018 con el Acto Legislativo 01/2018 se implementó la garantía a nivel constitucional. Por cuenta del sinnúmero de casos que se presentaron ante juez constitucional para salvaguardar la garantía de doble conformidad, la Corte Constitucional debió unificar su jurisprudencia en la materia y ha exhortado al Congreso a regular para que coexista correctamente con los recursos extraordinarios, a través de las SU-792 de 2014, SU-217 de 2019 y SU-006 y 07 de 2023.

A raíz de los vacíos normativos, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al encontrarse con casos que ameritan la procedencia de un recurso para garantizar la doble conformidad resolvió a través de su propia jurisprudencia establecer la forma, el tiempo y la oportunidad en que esta procedería tal y como se expuso en los antecedentes.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

3.1 Teorización de la doble conforme, teleología y aplicación:

En el art. 29 inc. 1º de la Constitución se reconoce la dimensión jurídico-objetiva del debido proceso. El concreto y efectivo ejercicio de este derecho presupone la configuración normativa de las formalidades esenciales que han de regir los procedimientos. Por ello, el art. 29 inc. 2º ídem preceptúa que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa y con observancia de las formas propias de cada juicio. En consecuencia, la delimitación del ámbito de protección del debido proceso ha de consultar el desarrollo legal pertinente.

El ámbito de protección del derecho al debido proceso está demarcado, entonces, tanto por prescripciones constitucionales genéricas, como por la específica configuración legal de las formas propias de cada juicio, pues se trata de una garantía de marcada composición normativa.

Desde esa perspectiva, el Acto Legislativo número 01 de 2018, cuyo objeto estriba en “implementar el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria” en los procesos penales seguidos en contra de los aforados mencionados en el art. 235 de la Constitución, estableció las bases fundantes del debido proceso penal aplicado a aquellos.

Una de las máximas que rige esa competencia especial, asignada a la Corte Suprema de Justicia, en razón de la persona, es la garantía que existe en cabeza del procesado, de impugnar las decisiones judiciales emitidas en el curso del juicio. Y tal prerrogativa no solo comprende la facultad de apelar la sentencia, sino los autos que, por desarrollo legal concreto, admiten el recurso de apelación en dicho trámite *-de juzgamiento-*.

La teleología misma del Acto legislativo indica que el constituyente derivado implementó un juicio penal de doble instancia para aforados. El objeto mismo de la ley distingue entre el derecho a la doble instancia y la posibilidad de impugnar la primera sentencia condenatoria, garantías que, si bien son facetas del derecho de impugnación, tienen un distinto ámbito de aplicación.

La doble instancia, en sí misma, implica la posibilidad de que las decisiones que emite el juez natural, en un primer nivel decisorio, sean objeto de revisión *-lato sensu-* por un juez distinto y superior en el plano decisorio. Es la ley la que, entonces, especifica cuáles resoluciones judiciales pueden ser cuestionadas por la vía de la apelación, para que las conozca un juez de segunda instancia, sin que tal nivel de revisión, en esencia, pertenezca o derive de la decisión que resuelve el fondo de la controversia, conocida como sentencia.

Por su parte, el derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria, más que un asunto de estructura, es una garantía instituida a favor de quien es declarado penalmente responsable, al margen de la instancia en que es condenado; de esa manera, se pretende que la presunción de inocencia que cobija a toda persona deba pasar por un doble filtro *-ordinario-* de revisión, antes de ser desvirtuada mediante declaratoria judicial.

En un juicio de dos instancias, entonces, se permite apelar la sentencia, así como determinados autos, por aspectos estructurales. Allí no importa, si se trata de la sentencia, el sentido de la decisión, sino la posibilidad de revisión por una instancia superior, mientras que el derecho a impugnar el primer fallo de condena es una protección reforzada al derecho fundamental a la presunción de inocencia, concretado en la garantía de la doble conformidad.

El art. 1º inc. 3º de la Carta Política, al definir la competencia de la Sala de Casación Penal de la Corte, preceptúa que esta última conocerá del recurso de apelación contra las sentencias que profiera la Sala Especial de Primera Instancia. Empero, con ello no quiere significarse, como podría entenderse con una mera lectura literal de la norma, apartada de la teleología del acto legislativo y de sus demás disposiciones, que contra las demás decisiones interlocutorias dictadas por la Sala de Primera Instancia no proceda la apelación. No. En seguida, el inc. 4º ídem clarifica que la primera condena podrá ser impugnada.

Ello muestra que, para el constituyente, el mecanismo de impugnación está atado a la

sentencia de naturaleza condenatoria, mientras que la apelación se predica de esa y de las demás decisiones interlocutorias que se puedan adoptar en el juicio ante la Sala Especial de Primera Instancia, que se caracteriza por tener doble instancia. Así se aduce del art. 3º ídem, que al modificar el art. 235-3 de la Constitución, establece que son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia conocer, por una parte, del derecho de impugnación y, por otra, del recurso de apelación en materia penal, conforme lo determine la ley.

Además, el modificado art. 235-6 C. P. dispone que es función de la Sala de Casación Penal resolver los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones proferidas por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Allí no hay distinción alguna en punto de la naturaleza de la decisión, por lo que mal podría concluirse que solo la sentencia admite apelación, cuando, como lo determina la ley, en un juicio penal de doble instancia, también son apelables los autos interlocutorios (arts. 176 inc. 3º de la Ley 906 de 2004 y 191 de la Ley 600 de 2000).

Tales razones conducen a interpretar que cuando el art. 234 inc. 2º de la Constitución, modificado por el art. 2º del Acto Legislativo, dispone que ha de garantizarse la doble instancia de la sentencia, no quiere decir que solo sea esta decisión la que admita el recurso de apelación, pues la norma seguidamente indica que también debe garantizarse el derecho a la impugnación de la primera condena, lo que, atendidas las anteriores razones, implica que, por ser un juicio de doble instancia, contra toda sentencia procede apelación; ello, sin perjuicio de la garantía de que la primera condena, pueda ser impugnada.

3.2 Problemas que pretende solventar la iniciativa:

Mediante Sentencia C-792 de 2014, la Corte Constitucional señaló que, en virtud del artículo 29 de la Constitución Nacional, toda persona condenada por primera vez tiene derecho a impugnar la sentencia ante el superior funcional del juez que la profirió. Posteriormente, en Sentencia de Unificación SU-215 de 2016, dicha Corporación precisó que el derecho a impugnar la primera condena operaba también respecto de las proferidas por los tribunales superiores, razón por la cual, el Legislador expidió el Acto Legislativo 01 de 2018, modificadorio del artículo 235 de la Carta Política, atribuyendo a la Corte Suprema de Justicia la competencia para conocer de la impugnación especial de la primera condena dictada por los tribunales.

El Acto Legislativo 01 de 2018 desarrolló constitucionalmente la garantía de doble conformidad y le dio a la Corte Suprema de Justicia facultades para ocuparse de la primera sentencia condenatoria en casos de aforados, también determinó que toda primera sentencia condenatoria debía ser revisada, o sea, extendió esa garantía a todos los ciudadanos sin hacer distinción por su fuero. Sin embargo, a más de cinco años de expedido el acto legislativo y de

que las Salas de Instrucción y de Primera Instancia entraran en funcionamiento, no hay una norma que se ocupe del procedimiento en particular.

Es decir, aunque la existencia de la garantía no se discute, lo que sí está en discusión es cómo se tramita el recurso de impugnación especial, lo que ha generado que muchas personas acudan a la acción constitucional de tutela cuando consideran que su derecho a que les revisen la primera sentencia condenatoria ha sido pretermitido o se ha confundido con la oportunidad para presentar los recursos extraordinarios de Casación y Revisión.

De ese problema dio cuenta la Corte Constitucional en su más reciente providencia al respecto, la SU 007 de 2023 en la que se ocupó de unificar los precedentes que ya venía fijando en sentencias previas y por cuenta de lo que exhortó una vez más al Gobierno nacional y al Congreso de la República para que regularan la materia **“TERCERO.- Reiterar el exhorto al Congreso de la República efectuado por esta Corte en las sentencias SU-792 de 2014, SU-217 de 2019 y SU-006 de 2023, para que, en ejercicio de su potestad de configuración legislativa, regule de manera integral el mecanismo que garantice el ejercicio del derecho a impugnar la sentencia condenatoria en materia penal”**.

En respuesta a estas normas, y a falta de una ley que lo reglamente efectivamente, **el vacío normativo ha sido solventado parcialmente por la Corte Suprema de justicia a través de sus providencias:**

Por ahora, las reglas fijadas por el alto tribunal de la jurisdicción ordinaria son:

(i) *Se mantiene incólume el derecho de las partes e intervinientes a interponer el recurso extraordinario de casación, en los términos y con los presupuestos establecidos en la ley y desarrollados por la jurisprudencia.*

(ii) *Sin embargo, el procesado condenado por primera vez en segunda instancia por los tribunales superiores tendrá derecho a impugnar el fallo, ya sea directamente o por conducto de apoderado, cuya resolución corresponde a la Sala de Casación Penal.*

(iii) *La sustentación de esa impugnación estará desprovista de la técnica asociada al recurso de casación, aunque seguirá la lógica propia del recurso de apelación. Por ende, las razones del disenso constituyen el límite de la Corte para resolver.*

(iv) *El tribunal, bajo esos presupuestos, advertirá en el fallo, que, frente a la decisión que contenga la primera condena, cabe la impugnación especial para el procesado y/o su defensor, mientras que las demás partes e intervinientes tienen la posibilidad de interponer recurso de casación.*

(v) *Los términos procesales de la casación rigen los de la impugnación especial. De manera que el plazo para promover y sustentar la impugnación*

especial será el mismo que prevé el Código de Procedimiento Penal, según la ley que haya regido el proceso -600 de 2000 o 906 de 2004-, para el recurso de casación.

(vi) *Si el procesado condenado por primera vez, o su defensor, proponen impugnación especial, el tribunal, respecto de ella, correrá el traslado a los no recurrentes para que se pronuncien, conforme ocurre cuando se interpone el recurso de apelación contra sentencias, según los artículos 194 y 179 de las Leyes 600 y 906, respectivamente. Luego de lo cual, remitirá el expediente a la Sala de Casación Penal.*

(vii) *Si además de la impugnación especial promovida por el acusado o su defensor, otro sujeto procesal o interviniente promovió casación, esta Sala procederá, primero, a calificar la demanda de casación”¹.*

También precisó la Sala que, al acusado condenado en segunda instancia por los tribunales, le corresponde acudir a la impugnación especial y al mismo tiempo en casación, solo cuando frente a delitos conexos en relación con uno de ellos se ha cumplido con el principio de doble conformidad judicial. De esta manera lo estableció:

“Si se trata de una sentencia del Tribunal en la cual se condena por primera vez, puede interponerse la impugnación especial o el recurso extraordinario de casación. Este último está disponible solo para los sujetos procesales distintos al procesado y su defensor. El procesado y el defensor, se precisa, cuenta con el derecho a recurrir a través de la impugnación la primera condena, y solamente les es dable recurrir simultáneamente en casación en hipótesis de delitos conexos respecto de los cuales se ha declarado la responsabilidad penal del procesado en primera y segunda instancia”².

3.3 Marco Convencional:

El artículo 2.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona inculpada de un delito durante el proceso tiene derecho, en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas: “(...) derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior” De igual manera, el artículo 14 inc. 5° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que “5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado la garantía de doble conforme o doble conformidad judicial a lo largo de su jurisprudencia, señalando por ejemplo que no solo es una garantía fundamental que hace parte integral del debido proceso, sino que es un deber del Estado que a la vez determina la legitimidad de sus decisiones:

¹ CSJ AP1263, 3 de abr. 2019, rad. 54.215.

² CSJ AP, 16 sep. 2020, rad. 56957.

“89. La doble conformidad judicial, expresada mediante la íntegra revisión del fallo condenatorio, confirma el fundamento y otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado, y al mismo tiempo brinda mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado.

90. Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo[49]. **El Estado puede establecer fueros especiales para el enjuiciamiento de altos funcionarios públicos, y esos fueros son compatibles, en principio, con la Convención Americana (supra párr. 74). Sin embargo, aun en estos supuestos el Estado debe permitir que el justiciable cuente con la posibilidad de recurrir del fallo condenatorio.** Así sucedería, por ejemplo, si se dispusiera que el juzgamiento en primera instancia estará a cargo del presidente o de una sala del órgano colegiado superior y el conocimiento de la impugnación corresponderá al pleno de dicho órgano, con exclusión de quienes ya se pronunciaron sobre el caso”³. (Subrayas y negrilla fuera de texto).

De lo anterior, que la garantía a que el primer fallo condenatorio sea revisado le sea otorgada a todos los ciudadanos incluso sin distinción de que tengan fuero, así lo ha reiterado en su jurisprudencia vinculante: “La jurisprudencia de esta Corte ha sido enfática al señalar que el derecho a impugnar el fallo busca proteger el derecho de defensa, en la medida en que otorga la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión adoptada en un procedimiento viciado y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses del justiciable⁴. **La doble conformidad judicial, expresada mediante la íntegra revisión del fallo condenatorio o sancionatorio, confirma el fundamento y otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado, y al mismo tiempo brinda mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado**⁵. En este sentido, el derecho a recurrir del fallo, reconocido por la Convención, no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó y emitió el fallo condenatorio o sancionatorio, ante el que la persona afectada tenga o pueda tener acceso. Para que haya una verdadera revisión de la sentencia, en el sentido requerido por la Convención, es preciso que el tribunal superior reúna las características jurisdiccionales que lo legitiman para conocer del caso concreto⁶. Sobre este punto, si bien los

Estados tienen cierta discrecionalidad para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir del fallo. La posibilidad de “recurrir del fallo” debe ser accesible, sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho⁷. (Subrayas y negrilla fuera de texto).

Sobre el mecanismo para procurar la materialización del derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria ha expresado la Corte IDH en el caso Mohamed vs. Argentina que: “Debe entenderse que, independientemente del régimen o sistema recursivo que adopten los Estados Partes y de la denominación que den al medio de impugnación de la sentencia condenatoria, **para que éste sea eficaz, debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una condena errónea. Ello requiere que pueda analizar cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho.** Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria⁸. (Subrayas y negrilla fuera de texto).

Además el Tribunal considera que, en la regulación que los Estados desarrollen en sus respectivos regímenes recursivos, deben asegurar que dicho recurso contra la sentencia condenatoria respete las garantías procesales mínimas que, bajo el artículo 8 de la Convención, resulten relevantes y necesarias para resolver los agravios planteados por el recurrente, lo cual no implica que deba realizarse un nuevo juicio oral, razón por la que en el presente proyecto de ley se dispone que las razones del disenso constituirán el límite para resolver de la autoridad judicial revisora de la primera condena, materia que se cohesiona con lo dispuesto por la Sala Penal de nuestra Corte Suprema de Justicia.

En ese sentido, también hay que tener en cuenta que el pasado 3 de junio del 2024 se condenó al Estado colombiano por la vulneración de esta garantía al ciudadano Saulo Arboleda Gómez. Este ciudadano, luego de fungir como Ministro de Comunicaciones de Colombia, fue juzgado y condenado en un proceso de única instancia llevado por la Corte Suprema de Justicia. La Corte Interamericana determinó que, de la lectura del artículo 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos no se establece

³ CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO BARRETO LEIVA VS. VENEZUELA SENTENCIA DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2009. Fondo, Reparaciones y Costas.

⁴ Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 158, y Caso Barreto Leiva, supra nota 96, párr. 88.

⁵ Cfr. Caso Barreto Leiva, supra nota 96, párr. 89.

⁶ Cfr. Caso Castillo Petrucci y otros, supra nota 151,

párr. 161; Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, párr. 192, y Caso Herrera Ulloa, supra nota 187, párr. 159.

⁷ Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Herrera Ulloa, supra nota 187, párrs. 161 y 164.

⁸ Corte Interamericana de Derechos Humanos caso Mohamed vs. Argentina sentencia de 23 de noviembre de 2012 (excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas).

ninguna clase de excepción, pues se dispone claramente que el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior existe, y no hace ninguna distinción sobre el tipo de tribunal que emitiría la decisión a apelarse, ni sobre la persona que pueden ser acreedores de estas garantías. Dice la Corte:

Esta Corte se ha referido en su jurisprudencia, de manera constante, al alcance y contenido del artículo 8.2.h) de la Convención, y ha establecido que es el derecho a recurrir el fallo condenatorio es una garantía básica prevista en la Convención Americana y que aplica a todas las personas y procesos. El Tribunal ha entendido que dicho derecho consiste en una garantía mínima y primordial que “se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía [...]”. Con el fin de evitar que quien esté incurso en un proceso no sea sometido a decisiones arbitrarias, la Corte ha interpretado que el derecho a recurrir el fallo debe garantizarse a todo aquél que es condenado. Por lo mismo, la Corte ha considerado el derecho a recurrir el fallo como una de las garantías mínimas que tiene toda persona que es sometida a una investigación y proceso penal.

La Corte también ha determinado, que el artículo 8.2.h) de la Convención se refiere a un recurso ordinario, accesible y eficaz, el cual permita analizar las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, posibilitando un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria. (...)

Particularmente con el artículo 8.2.h), encuentra esta Corte que la disposición no establece ningún tipo de excepción en su aplicación, el texto de la misma establece de forma clara que existe “el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior” y no hace ninguna distinción con relación al tipo de tribunal que emitiría la decisión a apelarse, ni excluye a persona alguna de dicha garantía. Por lo expuesto, a criterio de la Corte, dicha obligación aplica a todos los procesos e incluso a los de “aforados constitucionales”. (Subrayas y negrilla fuera de texto)⁹.

En ese sentido, la Corte concluye que la obligación del Estado de proporcionar un recurso judicial, no se reduce a la mera existencia de los tribunales o procedimientos formales, sino también incluye la obligación de adoptar medidas positivas para garantizar que los recursos proporcionados son verdaderamente efectivos. En ese sentido, se menciona que no basta que formalmente existan algunos recursos, sino que para que estos demuestren ser efectivos, deben poder dar resultados en lo que tiene que ver con vulneraciones de derechos

humanos¹⁰. Por lo tanto, la Corte considera que sí se vulneraron los derechos de Saulo Arboleda.

A pesar de determinar esta vulneración de Derechos, la Corte posteriormente desarrolla como positivo la adopción y regulación del derecho con posterioridad en los hechos. Destacan, entre otras cosas, la Sentencia C-792 de 2014, el Acto Legislativo 01 de 2018 y la Sentencia SU-146 de 2020 que ordenó retrotraer los efectos de la garantía de la impugnación especial al 30 de enero de 2014. Concluye la Corte:

La Corte destaca los esfuerzos realizados por el Estado, sin embargo, encuentra que al momento en que ocurrieron los hechos de este caso, Colombia no había adoptado las medidas necesarias para la adecuada implementación de sus obligaciones convencionales en el ordenamiento jurídico interno. En primer lugar, la legislación colombiana no establecía el derecho a recurrir el fallo de los “aforados constitucionales”; y en segundo lugar, las autoridades judiciales no garantizaron este derecho por medio de los recursos existentes. Por esa razón, la Corte estima que, al momento que ocurrieron los hechos del presente caso, Colombia no cumplió con su deber de adoptar disposiciones de derecho interno y es responsable por la violación del artículo 2° de la Convención”¹¹.

Al existir un fallo de esta naturaleza, llama la atención de que internacionalmente el país también debe actualizarse normativamente. Al margen de que la Corte no ordenó al Estado que hubiera un proceso de modificación normativa, es claro que a la fecha el llamado a regular es el Congreso de la República. Si bien las sentencias de la Corte Constitucional y la Corte Suprema han hecho mucho a la luz del marco interpretativo del Acto Legislativo 01 de 2018, el órgano democrático por excelencia también debe sacar una ley para blindar esta garantía y para ocuparse de aspectos que la jurisprudencia no ha podido.

3.4. Marco Constitucional:

La Constitución Política de 1991 establece como una de las garantías procesales ancladas al debido proceso la impugnación de las sentencias, de acuerdo a la mención que aparece en el artículo 29 del texto constitucional. Esto también aparece a la luz de otros textos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Lo anterior no obstante tuvo una paradoja durante mucho tiempo: Los procesos en única instancia que se adelantaban en la Corte Suprema de Justicia contra aforados constitucionales. Hay que tener en cuenta que, justamente analizando esta situación por medio de diferentes pronunciamientos, la Corte Constitucional varió su línea jurisprudencial y encontró que sí resultaba problemático desde el

⁹ Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Arboleda Gómez vs. Colombia. Sentencia del 3 de junio de 2024 (Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C. No. 525. Párrs. 63-44, 66.

¹⁰ *Ibid.* Párr. 72.

¹¹ *Ibid.* Párr. 78.

debido proceso que, ante una sentencia condenatoria que se de en segunda instancia no existiera un mecanismo para impugnarla.

Por este motivo, resulta pertinente traer a colación la línea jurisprudencial que desarrolló la Corte Constitucional hasta la Sentencia C-792 de 2014 analizando el juicio penal a los aforados constitucionales en única instancia, así como los elementos que le permitieron cambiar la línea jurisprudencial y empezar a analizar la doble conformidad. Hay que tener claro que, si bien la Corte Constitucional ha analizado la doble conformidad principalmente en el caso de aforados constitucionales, este es un derecho que se consagra ante toda la ciudadanía y cuya aplicación aún no ha sido regulada por el legislador, a pesar de los exhortos de la Corte Constitucional.

En ese sentido, en primer lugar se hablará acerca de tres épocas diferentes: La primera época en la cual la Corte Constitucional consideraba ajustado a la Constitución Política el que un juicio penal hacia aforados constitucionales se desarrollara en única instancia ante la Corte Suprema de Justicia; la segunda época que habla de los cambios que se acercaron a la luz de la Sentencia C-792 de 2014; y finalmente la tercera época que tiene como punto de origen el Acto Legislativo 01 de 2018.

Primera época: Juicio penal a aforados constitucionales en única instancia

La Sentencia C-142 de 1993 abrió la línea jurisprudencial que avaló constitucionalmente el juzgamiento en única instancia a aforados constitucionales. En ese momento, la Corte Constitucional resolvió una demanda contra varias disposiciones del Código Penal, del Código Penal Militar y de los estatutos de procedimiento penal del momento que, preveían en términos generales la competencia de la Corte Suprema de Justicia para conocer procesos penales contra aforados en única instancia. Para la persona demandante, las normas desconocían los artículos 29 y 31 de la Constitución, el artículo 14 del PIDCP y el artículo 8 de la CADH en el sentido de que en los mencionados procesos de única instancia, no se permite realizar ninguna impugnación.

La Corte Constitucional estableció que frente a estos procesos la impugnación era posible por medio de la acción de revisión, el recurso extraordinario de casación y la solicitud de nulidad¹². También mencionó que las decisiones de única instancia dictadas por la Corte Suprema de Justicia generaba dos ventajas: (I) la economía procesal y (ii) escapar a la posibilidad de errores a cargo de jueces y tribunales de menor jerarquía¹³. En ese sentido, la Corte consideró que la persona procesada sí podía impugnar la sentencia condenatoria en una u otra forma¹⁴.

La Sentencia C-411 de 1997 resolvió la demanda presentada contra apartados del artículo 68 del Código de Procedimiento Penal en donde se establecía que a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le correspondía, por una parte el conocimiento de la acción de revisión contra las sentencias de única instancia, y por otra parte el juzgamiento de los funcionarios descritos en el inciso 3° del numeral 6 del artículo 235 de la Constitución Política, es decir, los Congresistas. La persona demandante consideró que al existir un trato diferenciado a los Congresistas frente a los demás ciudadanos, se les vulneraba el debido proceso.

La Corte consideró en ese momento, que el competente para definir las instancias procesales era el legislador. De la misma manera, reiteró su jurisprudencia al mencionar que fue la misma Constitución la que había contemplado los procesos de única instancia respecto de aforados constitucionales¹⁵. Y que, si existía alguna vulneración de derechos fundamentales por la existencia de alguna vía de hecho, podría adelantar la acción de tutela conforme a lo que la Corte Sostenía en la Sentencia C-543 de 1992¹⁶.

La Sentencia C-934 de 2006 analizó la disposición contenida en el artículo 32 parcial de la Ley 906 de 2004 que regula las funciones de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La H. Corte en su momento consideró el siguiente problema jurídico: “¿Vulnera los derechos al debido proceso y a la defensa, así como el principio de la doble instancia consagrados en el artículo 29 de la Carta y en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia que hacen parte del bloque de constitucionalidad, el que los numerales 5, 6, 7 y 9 del artículo 32 de la Ley 906 de 2004 establezcan que los procesos penales que se sigan contra altos funcionarios del Estado enunciados en tales disposiciones son de competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia?”.

Luego de considerar que no existía el fenómeno de la cosa juzgada constitucional al estar la mencionada norma inscrita en un modelo penal de tendencia acusatoria y no inquisitorial, la Corte Constitucional reiteró su jurisprudencia y sostuvo que la doble instancia no era la única forma de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de las personas procesadas. Por lo que consideró que la garantía de esos bienes jurídicos se materializaba en la definición de su caso por la Corte Suprema de Justicia. Y si bien la Corte no era infalible, había otros mecanismos definidos para cuestionar las decisiones en única instancia¹⁷.

En esa misma sentencia la Corte constató que no existía obligación internacional alguna que impidiera que en los modelos constitucionales no se pudiera dar ese tratamiento a los aforados constitucionales.

¹² Corte Constitucional. Sentencia C-142 de 1993. Magistrado Ponente Jorge Arango Mejía.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Corte Constitucional. Sentencia C-411 de 1997. Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ C-934 de 2006.

Respecto del caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, la Corte encontró que ese no era un asunto centrado en el especial juzgamiento realizado por los órganos judiciales de cierre. De la misma manera, mencionó que el Comité de Pacto de Derechos Civiles y Políticos tampoco se había referido estrictamente a la materia cuestionada constitucionalmente. Dijo la Corte:

“De lo anterior encuentra la Corte que la interpretación del art. 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y [del] art. 8.2 del Pacto de san José que han efectuado los órganos internacionales competentes, resulta armónica con la interpretación que se ha hecho de los artículos 29 y 31 de la carta Política en materia de juzgamiento de los altos funcionarios del Estado, en la medida en que de dichos pronunciamientos no se deriva una regla según la cual en los juzgamientos de altos funcionarios con fuero penal ante el órgano de cierre de la jurisdicción penal, deba establecerse una segunda instancia semejante a la que existe para otros juicios penales. Es decir, cada Estado goza de un amplio margen para configurar los procedimientos y diseñar los mecanismos eficaces de protección de los derechos, sin que esté ordenado, según la jurisprudencia vigente, que en los casos de altos funcionarios aforados se prevea siempre la segunda instancia”¹⁸.

Es decir, en este momento, la Corte Constitucional desarrolló como el amplio margen de apreciación de los Estados les permitía diseñar y configurar procedimientos y mecanismos sin que le haya sido ordenado a un Estado considerar la doble instancia. Otras decisiones con esta tesis son las sentencias T-1246 de 2008, la SU-811 de 2009, la T-965 de 2009, la SU-195 de 2012 y la SU-198 de 2013.

Segunda época: La Sentencia C-792 de 2014 y sus consecuencias sobre el ordenamiento jurídico.

Esta segunda época está determinada en gran parte por la actualización de los estándares internacionales en la materia. No se puede leer la decisión que toma la Corte en la Sentencia C-792 de 2014 sin analizar que, con posterioridad en el 2006 empezaron a existir sentencias y recomendaciones que analizaron como regímenes legales como el colombiano no satisfacían el debido proceso en lo concerniente a garantizar la impugnación y la segunda instancia.

Por ejemplo, en el caso Barreto Leiva vs. Venezuela la Corte Interamericana sostuvo que, si bien los Estados miembros podían establecer un procedimiento de juzgamiento especial para algunos funcionarios, siempre debían respetar la doble conformidad y prever recursos efectivos para recurrir la condena. Por lo tanto, la Corte consideró que Venezuela vulneró la garantía judicial prevista en el artículo 8.2.h de la CADH debido a que el sentenciado no pudo impugnar el fallo.

De la misma manera, en el fallo Liakat Ali Alibux vs. Suriname de 2014, sí se corresponde al caso de un aforado, por lo que la Corte Interamericana confirmó la postura que había hecho valer en el caso Barreto Leiva vs. Venezuela. En este caso, el señor Liakat Ali Alibux que había sido ministro de Finanzas y de recursos naturales en Suriname, fue condenado en 2003 en única instancia por la Alta Corte de Justicia. Reflexionando sobre la práctica de los Estados respecto al juzgamiento penal de altos funcionarios, la Corte Interamericana advirtió que, si bien no era contrario al estándar interamericano de protección que se prevea un régimen especial de juzgamiento ante el tribunal de cierre, sí podía serlo el hecho de que se previera una única instancia. Por lo tanto, la Corte exploró algunas de las fórmulas jurídicas que se habían adoptado para hacer efectivo el derecho a recurrir el fallo.

En este sentido, el Tribunal constata que ello se ha logrado a través de diversas prácticas, a saber: a) cuando una Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es la que juzga en primera instancia, para que luego el Pleno de la misma, sea la instancia que revise el recurso interpuesto; b) cuando una determinada Sala de la Corte Suprema juzga en primera instancia y otra Sala, de distinta composición, resuelve el recurso presentado, y c) cuando una Sala conformada por un número determinado de miembros juzga en primera instancia y otra Sala conformada por un número mayor de jueces que no participaron en el proceso de primera instancia, resuelva el recurso. Asimismo, el Tribunal observa que la composición de las instancias revisoras incluye miembros que no conocieron del caso en primera instancia y que la decisión emitida por aquellas puede modificar o revocar el fallo revisado”¹⁹.

La Corte Interamericana también responde a los argumentos invocados por los Estados según los cuales, tanto el Sistema Universal como otros Sistemas regionales de Derechos Humanos permiten excepcionar la regla de la doble conformidad en algunos procesos. Dice la Corte Interamericana:

De igual manera, el Comité de Derechos Humanos ha señalado en sus decisiones que, el derecho a recurrir el fallo debe garantizarse sin importar el rango de la persona juzgada por lo que “si bien la legislación [de un] Estado Parte dispone en ciertas ocasiones que una persona en razón de su cargo sea juzgada por un tribunal de mayor jerarquía que el que naturalmente correspondería, esta circunstancia no puede por sí sola menoscabar el derecho del acusado a la revisión de su sentencia y condena por un tribunal”.

Por otro lado, la Corte considera pertinente referirse a lo alegado por el Estado en el sentido que el juzgamiento de altos funcionarios públicos en primera y única instancia, no es, por definición,

¹⁹ Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname. Sentencia de 30 de enero de 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Serie c276. Párr 98.

¹⁸ *Ibid.*

violatorio del principio generalmente aceptado del derecho a recurrir del fallo, con fundamento en la regulación permitida por ley de dicho derecho, según lo establecido por el artículo 14, inciso 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Al respecto, el Tribunal considera preciso resaltar que el artículo 14, inciso 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se diferencia del artículo 8.2(h) de la Convención Americana ya que el último es muy claro al señalar el derecho a recurrir el fallo sin hacer mención a la frase “conforme a lo prescrito por la ley”, como sí lo establece el artículo del PIDCP. Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lo ha interpretado en el párrafo 45 de su Observación General No. 32, en el sentido que:

*“La expresión “conforme a lo prescrito por la ley” en esta disposición no tiene por objeto dejar a discreción de los Estados Partes la existencia misma del derecho a revisión, puesto que este es un derecho reconocido por el Pacto y no meramente por la legislación interna. La expresión “conforme a lo prescrito por la ley” se refiere más bien a la determinación de las modalidades de acuerdo con las cuales un tribunal superior llevará a cabo la revisión, así como la determinación del tribunal que se encargará de ello de conformidad con el Pacto. El párrafo 5 del artículo 14 no exige a los Estados Partes que establezcan varias instancias de apelación. Sin embargo, la referencia a la legislación interna en esta disposición ha de interpretarse en el sentido de que si el ordenamiento jurídico nacional prevé otras instancias de apelación, la persona condenada debe tener acceso efectivo a cada una de ellas”*²⁰ (Subrayados fuera del texto).

De la misma manera, el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos emitió en el año 2007 la Observación General número 32 sobre el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. El párrafo 47 que hace parte de la sección “VII Revisión por un tribunal superior” afirmó lo siguiente:

“47. El párrafo 5 del artículo 14 se vulnera no solo si la decisión de un tribunal de primera instancia se considera definitiva sino también si una condena impuesta por un tribunal de apelación{§136} o un tribunal de última instancia{§137} a una persona absuelta en primera instancia no puede ser revisada por un tribunal superior. **Cuando el tribunal más alto de un país actúa como primera y única instancia, la ausencia de todo derecho a revisión por un tribunal superior no queda compensada por el hecho de haber sido juzgado por el tribunal de mayor jerarquía del Estado Parte; por el contrario, tal sistema es incompatible con el Pacto, a menos que el Estado Parte interesado haya formulado una reserva a ese efecto** {§138}”. (Negrillas fuera del texto).

Ante tal escenario fue emitida la Sentencia C-792 de 2014. La demanda que comenzó este proceso fue contra varios de la Ley 906 de 2004, entre los que se incluyó la norma que concede a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema el conocimiento de los recursos contra autos y sentencias que se profieran en primera instancia por tribunales superiores. En ese sentido, la persona accionante consideró que existía una omisión legislativa en tanto no se prevenían mecanismos suficientes para garantizar que la primera condena penal en segunda instancia fuera objeto de impugnación.

En ese sentido, la Sala Plena estimó dos problemas jurídicos: El primero relacionado a la existencia o no dentro del ordenamiento superior de un derecho a impugnar las sentencias proferidas en segunda instancia que, por primera vez, impongan una condena penal y el segundo relacionado con la existencia de estándares que deben satisfacerse para que se considere que el recurso es adecuado.

Apesar de que la Corte reconoció que era la primera vez que analizaba la mencionada problemática, afirmó que la impugnación de sentencias condenatorias contaba de manera autónoma con (i) fundamento normativo tanto en la Constitución como en el Bloque de Constitucionalidad, (ii) estatus jurídico como parte de los derechos que integran la defensa, (iii) un ámbito de acción en el proceso penal, (iv) el contenido de controvertir el fallo incriminatorio ante una instancia distinta a la que dictó la sentencia, (v) objeto en tanto es una sentencia que declara por primera vez la responsabilidad penal, (vi) finalidad en tanto pretende proteger a personas contenidas y dar una garantía de corrección judicial, (vii) se distingue de la posibilidad de apelar sentencias judiciales en tanto el Legislador sí puede establecer excepciones, pues en este caso el principio no actúa como imperativo o regla.

Siguiendo esta línea argumentativa, la Corte reconoció que su línea jurisprudencial que consideraba que la exigibilidad de impugnar se encontraba satisfecha al considerar los recursos de casación, revisión y la acción de tutela contra providencia judicial. Sin embargo, en esta ocasión consideró que eran vías procesales debilitadas. Dijo la Corte que los anteriores recursos no resolvía las siguientes pautas:

- Que el operador judicial que resuelva la impugnación cuente con lineamientos de valoración integral: completa, amplia y exhaustiva del fallo condenatorio
- Que el examen recaiga sobre la controversia en sí misma considerada y no primariamente sobre el análisis que de dicha situación realizó el juez que condenó.
- Que el recurso no esté sujeto a causales cerradas de procedencia.

La Corte concluyó que se configuró una omisión legislativa en el régimen procesal penal previsto por la inexistencia de un recurso idóneo que materialice el derecho a la impugnación en todos los casos

²⁰ *Ibid.* Párrs. 91-93.

en que, en el marco del proceso penal, el juez de primera instancia absuelve al condenado y el juez de segunda instancia revoca el fallo e impone condena por primera vez. En ese sentido, la Corte Constitucional estableció una inconstitucionalidad diferida y le dio un plazo al Congreso de la República para que regulara integralmente la impugnación de las sentencias que fijan por primera vez una condena tanto en el marco de juicios penales de única instancia, como en aquellos de dos instancias.

A pesar de que hasta este momento se ha venido trabajando en relación a los aforados constitucionales, la Sentencia C-792 de 2014 habla de que la impugnación de la primera sentencia condenatoria es de interés de toda la ciudadanía en su conjunto. Por ese motivo, el exhorto que dio la Corte Constitucional se hizo de una forma general para que se regulara hacia todas las personas que fueran condenadas en primera o segunda instancia por primera vez.

Como se verá a continuación, en la actualidad existe un tratamiento dispar. Pues con el Acto Legislativo 01 de 2018, se permitió a los aforados constitucionales poder materializar su derecho a la doble instancia, y también a la doble conformidad en los casos llevados ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo para el resto de la ciudadanía no es claro cómo se puede ejercer este derecho, lo cual ha generado que se presenten múltiples acciones de tutela y que sea la Corte Constitucional y la Corte Suprema la que tenga que colocar parámetros para materializar la doble conformidad en la ciudadanía.

Tercera época: Línea jurisprudencial con posterioridad al Acto Legislativo 01 de 2018

El 18 de enero de 2018 fue sancionado el Acto Legislativo 1 de 2018 “Por medio del cual se modifican los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política y se implementan el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria”. Este acto legislativo tiene cuatro artículos en donde se concede el derecho a la doble instancia y a la doble conformidad a Congresistas en su condición de aforados constitucionales y se crea al interior de la Corte Suprema de Justicia la Sala Especial de Instrucción y la Sala Especial de Primera Instancia, así como el régimen y las funciones que tienen los magistrados de las mencionadas salas.

El numeral 2 del artículo 235 de la Constitución modificado por el Acto Legislativo 1 de 2018 establece como atribución de la Corte Suprema de Justicia “conocer del derecho a la impugnación y del recurso de apelación en materia penal conforme lo determine la ley”. Sin embargo, a día de hoy no se encuentra expedida la ley que regule el ejercicio de tal atribución por la Corte Suprema de Justicia.

Lo anterior no ha impedido que la Corte Suprema haya dado directrices para garantizar el derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria en tres casos: (i) los casos de aforados constitucionales, (ii) los casos en los que la primera condena en sede de casación y (iii) los casos en los que la primera

condena la dictan los Tribunales Superiores en segunda instancia. En la Sentencia SU 217 de 2019, la Corte Constitucional hizo referencia a las reglas establecidas por la Corte Suprema de Justicia en el Auto AP1263-2019 del 3 de abril de 2019 en donde se establecieron reglas provisionales para tramitar la apelación de primeras condenas emitidas en segunda instancia por tribunales superiores:

“(i) Se mantiene incólume el derecho de las partes e intervinientes a interponer el recurso extraordinario de casación, en los términos y con los presupuestos establecidos en la ley y desarrollados por la jurisprudencia.

“(ii) Sin embargo, el procesado condenado por primera vez en segunda instancia por los tribunales superiores tendrá derecho a impugnar el fallo, ya sea directamente o por conducto de apoderado, cuya resolución corresponde a la Sala de Casación Penal.

“(iii) La sustentación de esa impugnación estará desprovista de la técnica asociada al recurso de casación, aunque seguirá la lógica propia del recurso de apelación. Por ende, las razones del disenso constituyen el límite de la Corte para resolver.

“(iv) El tribunal, bajo esos presupuestos, advertirá en el fallo, que, frente a la decisión que contenga la primera condena, cabe la impugnación especial para el procesado y/o su defensor, mientras que las demás partes e intervinientes tienen la posibilidad de interponer recurso de casación.

“(v) Los términos procesales de la casación rigen los de la impugnación especial. De manera que el plazo para promover y sustentar la impugnación especial será el mismo que prevé el Código de Procedimiento Penal, según la ley que haya regido el proceso –en 600 de 2000 o 906 de 2004–, para el recurso de casación.

“(vi) Si el procesado condenado por primera vez, o su defensor, proponen impugnación especial, el tribunal, respecto de ella, correrá el traslado a los no recurrentes para que se pronuncien, conforme ocurre cuando se interpone el recurso de apelación contra sentencias, según los artículos 194 y 179 de las leyes 600 y 906, respectivamente. Luego de lo cual, remitirá el expediente a la Sala de Casación Penal.

“(vii) Si además de la impugnación especial promovida por el acusado o su defensor, otro sujeto procesal o interviniente promovió casación, esta Sala procederá, primero, a calificar la demanda de casación.

“(viii) Si se inadmite la demanda y –tratándose de procesos seguidos por el estatuto adjetivo penal de 2004– el mecanismo de insistencia no se promovió o no prosperó, la Sala procederá a resolver, en sentencia, la impugnación especial.

“(ix) Si la demanda se admite, la Sala, luego de realizada la audiencia de sustentación o de recibido el concepto de la Procuraduría –según

sea Ley 906 o Ley 600–, procederá a resolver el recurso extraordinario y, en la misma sentencia, la impugnación especial.

(x) Puntualmente, contra la decisión que resuelve la impugnación especial no procede casación.

Ello porque ese fallo correspondiente se asimila a una decisión de segunda instancia y, tal como ocurre en la actualidad, contra esas determinaciones no cabe casación (cfr., entre otros pronunciamientos, CSJ AP6798-2017, rad. 46395; CSJ AP 15 jun. 2005, rad. 23336; CSJ AP 10 nov. 2004, rad. 16023; CSJ AP 12 dic. 2003, rad. 19630 y CSJ AP 5 dic. 1996, rad. 9579).

(xi) Los procesos que ya arribaron a la Corporación, con primera condena en segunda instancia, continuarán con el trámite que para la fecha haya dispuesto el magistrado sustanciador, toda vez que la Corte, en la determinación que adopte, garantizará el principio de doble conformidad”²¹.

En esa sentencia la Corte declaró que se habían configurado algunas causales de procedencia de tutelas contra providencias judiciales por lo que decidió tutelar los derechos reclamados por las personas tutelantes. También reiteró el exhorto al Congreso de la República en los siguientes términos reconociendo que el avance realizado a través del Acto Legislativo 01 de 2018 era sustancial pero no suficiente:

“Si bien el Congreso ha venido avanzando en la regulación del derecho constitucional de impugnar las sentencias condenatorias, como se evidencia con la reforma introducida a los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución mediante el Acto Legislativo 01 de 2018, resulta indispensable que dicha tarea se complemente con la ley que regule la competencia de la Corte Suprema de Justicia consistente en conocer del derecho de impugnación y del recurso de apelación en materia penal, como lo prevé el numeral 2 del artículo 235 de la Constitución, según la reforma introducida por el artículo 3 del mencionado Acto Legislativo 01 de 2018.

Dado que subsiste la omisión legislativa en cuanto a la regulación del procedimiento para el ejercicio del derecho a la impugnación de las condenas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y 235, numerales 2 y 7, de la Constitución, la Corte exhortará, una vez más, al Congreso de la República a efectos de que, en ejercicio de su amplia libertad de configuración del derecho y dentro del marco de la Constitución, regule dicho procedimiento”²².

En la Sentencia SU-218 de 2019 la Corte Constitucional recogió la fórmula que estaba aplicando la Corte Suprema de Justicia para garantizar la doble conformidad en los casos que lleven a una sentencia penal en sede de casación

luego de que en las dos instancias se absolviera. Dice la Corte:

“Sin embargo, esta posición fue explícitamente recogida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 14 de noviembre de 2018 . Allí, la Corte reivindicó el derecho a impugnar el primer fallo de condena como una protección reforzada del derecho a la presunción de inocencia, y consideró que, en la actualidad, el numeral 7° del artículo 235 de la Constitución, con la reforma que introdujo el Acto legislativo 01 de 2018, “en consonancia con las normas propias para la interposición y resolución del recurso de apelación contra sentencias”, ofrecen los presupuestos básicos para la garantía de tal derecho. Sobre la forma en que se debe tomar la decisión, la Corte manifestó lo siguiente:

Quiere ello decir, entonces, que cuando la primera condena se dicte en sede de casación, la Sala de Casación Penal ha de integrarse de manera tal que tres de sus magistrados no conozcan del asunto, a fin de que queden habilitados para pronunciarse sobre la doble conformidad, si ésta llegare a solicitarse por la defensa.

De ahí que, en asuntos como el aquí analizado, el magistrado ponente ha de convocar a los cinco magistrados que le siguen en orden alfabético, a fin de conformar sala (de seis integrantes) para discutir la ponencia y dictar la sentencia. Los tres magistrados restantes integrarán sala para revisar, dado el caso, la doble conformidad”.

Se trata, desde luego, de un procedimiento implementado de manera transitoria, para que el derecho “no quede en el vacío”, mientras el Legislador reglamenta integralmente el trámite correspondiente; para ello, el Alto Tribunal de la justicia ordinaria, en la misma providencia, dirigió un nuevo exhorto al órgano de representación política”²³.

En la Sentencia SU 397 de 2019, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente:

“Conforme a lo expuesto, se concluye que, si bien la falta de desarrollo legal del derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria persiste, la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha avanzado hacia su protección. Para el efecto, y puntualmente en los casos en que el primer fallo inculpativo es adoptado por los tribunales superiores, dicha Sala ha empleado el recurso extraordinario de casación. Así, en un comienzo, la Sala flexibilizó las barreras que por mandato legal y de ordinario tiene la casación, de suerte que, en varias oportunidades, no solo decidió la demanda como tal, sino que, además, se pronunció sobre el fondo del asunto y analizó la responsabilidad del condenado; y más recientemente, optó por definir «medidas provisionales» orientadas a habilitar el ejercicio de este derecho, las cuales, en todo caso,

²¹ Corte Constitucional. Sentencia SU 217 de 2019. Magistrado Sustanciador Antonio José Lizarazo Ocampo.

²² *Ibid.*

²³ Corte Constitucional. Sentencia SU 218 de 2019. Magistrado Sustanciador Carlos Bernal Pulido.

son aplicables «dentro del marco procesal de la casación».

7.6 Ahora bien, aunque en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, más específicamente en la Sentencia C-792 de 2014, la Corte Constitucional concluyó que el recurso de casación no es idóneo para satisfacer las exigencias sustanciales del derecho a la doble conformidad judicial, nada se opone a que ante la inactividad del legislador en el desarrollo del aludido derecho, de manera transitoria, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia viabilice su ejercicio con los medios que tiene a su alcance, como en un comienzo lo hizo al emplear la casación con este propósito adicional, o después mediante el trámite del recurso de impugnación especial, con los términos y las pautas generales del recurso de apelación.

Este es un remedio judicial que, aunque no es óptimo, sí cumple materialmente las condiciones sustanciales definidas por esta Corporación en la citada sentencia –(i) análisis de la controversia jurídica que subyace al fallo judicial cuestionado, más allá de las causales de casación y de la sentencia recurrida, y (ii) revisión del fallo por una autoridad judicial distinta de la que impuso la condena– resulta respetuoso del valor normativo y vinculante de la mencionada reforma constitucional y de la comprensión de la Constitución como norma jurídica con eficacia directa (artículo 4 superior). Si bien es lógico que el derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria esté sometido a las etapas, formas y términos que dispongan la Constitución y la ley, de estas exigencias no se sigue que la falta de desarrollo legislativo de tal derecho constitucional pueda ser invocada para negar su exigibilidad. Como bien lo indicó esta Corporación en la Sentencia T-970 de 2014, «la garantía y efectividad de los derechos no depende exclusivamente de la voluntad del legislador. Sin duda es un actor muy importante en la protección de los derechos fundamentales, pero la Constitución, siendo norma de normas, es una norma jurídica que incide directamente en la vida jurídica de los habitantes y se debe utilizar, además, para solucionar casos concretos».

De este modo, es claro que, no solo los jueces de tutela, sino también los jueces y magistrados de la jurisdicción penal, según las circunstancias específicas del asunto puesto a su consideración y los otros derechos fundamentales o intereses constitucionales en conflicto, están llamados a garantizar, en el ámbito de sus competencias, la mayor realización posible del derecho a impugnar el primer fallo inculpatario. Así lo anotó este Tribunal en el numeral tercero de la parte resolutive de la Sentencia SU-215 de 2016, al referirse al ejercicio del derecho a la doble conformidad judicial respecto de la condena emitida por primera vez en casación: «la Corte Suprema de Justicia, dentro de sus competencias, o en su defecto el juez constitucional, atenderá a las circunstancias de cada caso para definir la forma de garantizar el derecho constitucional a

impugnar la sentencia condenatoria impuesta por primera vez por su Sala de Casación Penal»²⁴.

En ese sentido, si bien la Corte Constitucional ha reconocido las reglas que ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia y de que el vacío ha sido llenado de contenido de forma transitoria, no ha dejado de mencionar que hay un déficit normativo que solo puede ser cubierto por el legislador. De hecho, el que se sigan fallando tutelas por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia amparando los derechos a la doble instancia y a la doble conformidad, muestran una problemática que no se ha podido atender de la forma en que corresponde.

Conclusiones sobre la consagración constitucional de la garantía a la doble conformidad judicial en materia penal:

Este acápite ha sido desarrollado trayendo en un primer lugar la jurisprudencia constitucional sobre aforados y aforadas constitucionales debido a que hasta hace relativamente poco fue constitucional un modelo que no garantizaba ni la doble instancia ni la doble conformidad en procesos que se adelantaban contra ellas y ellos. Desde el año 2014 la situación comenzó a cambiar con la histórica Sentencia C-792 de 2014 que reconoció el derecho a la doble conformidad tanto para aforados constitucionales como para todas las personas que fueran condenadas por primera vez en segunda instancia.

Lo anterior creó una situación atípica en la normatividad nacional: Las personas aforadas constitucionales y las demás personas que no ostentan esta condición no tenían forma en la cual podían materializar su derecho a la doble conformidad. Por lo tanto, la Corte Constitucional exhortó al Congreso para regular la materia.

El Congreso de la República cumplió con su deber parcialmente. El Acto Legislativo 01 de 2018 resolvió la problemática para aforadas y aforados constitucionales. En ese sentido, se creó al interior de la Corte Suprema de Justicia una sala de instrucción y una sala de primera instancia. Por otra parte, el mencionado acto le dio la competencia a la Corte Suprema de Justicia para resolver las solicitudes de doble conformidad. Aunque existían algunas dudas sobre el caso de los aforados constitucionales, la Sentencia SU 146 de 2020 las resolvió.

Sin embargo, el Congreso de la República no ha cumplido su deber de regular la doble conformidad en el caso de la ciudadanía en general. A pesar de la existencia de múltiples sentencias recientes de la Corte Constitucional que exhorta al Legislador a cumplir con su deber, y a pesar del juicioso trabajo de la Corte Suprema de Justicia intentando garantizar este derecho para la ciudadanía en general, se necesita una legislación completa que pueda responder a las necesidades de las personas. El hecho de que ya se

²⁴ Corte Constitucional. Sentencia SU 367 de 2019. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.

vayan a cumplir diez años, hace que la urgencia de tramitar y discutir este proyecto sea mayor.

4. TRÁMITE DEL PROYECTO

Este proyecto busca implementar en la norma procesal aplicable las condiciones que ya ha desarrollado la jurisprudencia y así permitir de un lado, que la Sala de Casación penal siga tramitando el recurso de impugnación especial de la manera en que ella lo ha establecido para evitar traumatismos institucionales o que se ralenticen los procesos; y de otro, que todas las personas conozcan el mecanismo y puedan consultar en la ley las condiciones para que este proceda, pues la consagración misma del mecanismo en la norma es garantía de la disponibilidad y procedibilidad del recurso.

En esta iniciativa legislativa no se incluyen modificaciones a la organización actual de la sala de casación penal, pues se busca el establecimiento del recurso de impugnación especial en la ley procesal penal en los términos ya preceptuados por la Alta Corte, pero no una composición distinta de la Sala, dependerá de nuevas iniciativas ampliar la sala para que su capacidad sea mayor y pueda atender con mayor celeridad los recursos que a día de hoy resuelve.

En nuestra historia constitucional ha sido recurrente que puedan existir normas que tengan reserva de ley estatutaria y a la vez tengan contenido de ley ordinaria. La Corte Constitucional se refirió desde muy temprano sobre la materia. En la Sentencia C-193 de 2005 la Corte menciona lo siguiente:

“(...) la inclusión de asuntos sometidos a la reserva de ley estatutaria dentro de una ley ordinaria, no obliga a que la totalidad de la ley deba ser tramitada por el mismo procedimiento excepcional. En este caso, solo aquellos asuntos que afecten el núcleo esencial de derechos fundamentales, bien sea porque restringen o limitan su ejercicio o su garantía, deben ser tramitados como ley estatutaria, pero los demás asuntos no cobijados por este criterio material pueden recibir el trámite de una ley ordinaria.”

La Corte Constitucional mediante Sentencia C-756 de 2008 estableció los criterios para delimitar el ámbito de la reserva de ley estatutaria en materia de derechos y deberes fundamentales de la siguiente manera:

“(i) La reserva de ley estatutaria en materia de derechos fundamentales es excepcional, en tanto que la regla general se mantiene a favor del Legislador ordinario; (ii) La regulación estatutaria u ordinaria no se define por la denominación adoptada por el legislador, sino por su contenido material [...]. En consecuencia, el trámite legislativo ordinario o estatutario será definido por el contenido del asunto a regular y no por el nombre que el legislador designe; (iii) Mediante ley estatutaria se regula únicamente el núcleo esencial del derecho fundamental, de tal forma que si un derecho tiene mayor margen de configuración legal, será menor la reglamentación

por ley estatutaria; (iv) Las regulaciones integrales de los derechos fundamentales debe realizarse mediante ley cualificada y, (v) Los elementos estructurales esenciales del derecho fundamental deben regularse mediante ley estatutaria. De esta forma, es claro que la regulación puntual y detallada del derecho corresponde al legislador ordinario”.

Finalmente, esta misma corporación mediante Sentencia C-370 de 2019 estableció que, *“aun cuando la regulación de procedimientos necesariamente esté relacionada con el ejercicio de derechos fundamentales, por regla general se trata de materias que deben tramitarse mediante leyes ordinarias”.*

En este sentido, y teniendo en cuenta los criterios establecidos por la Corte Constitucional, el texto contenido en el artículo dos (02) tiene reserva de ley estatutaria, por lo que su aprobación deberá estar sometida a los requisitos especiales previstos para este tipo de norma consagrados en el artículo 152 constitucional. Lo anterior, no obsta para que todo el texto de la ley tenga reserva de ley estatutaria, pues el desarrollo que se hace sobre la garantía de la doble conformidad se hace de forma procesal, sin que en ningún caso se esté desarrollando el núcleo esencial del derecho. En otras palabras, solo se está haciendo una modificación al régimen procesal desarrollado en el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) para insertar el recurso por medio del cual se materializa la garantía de doble conformidad judicial.

4.1 Audiencia pública

El 17 de febrero del año en curso se celebró audiencia pública sobre el proyecto y se invitó a diversos sectores de la sociedad civil y de la academia para que rindieran concepto sobre el texto radicado.

El Observatorio de intervención ciudadana constitucional de la Universidad Libre señaló que el derecho de la doble conformidad subyace por vía jurisprudencial de la Sentencia C-792 de 2014, entre otras, es un derecho procesal cuya naturaleza adquiere especial importancia por corresponder a de manera directa con derechos fundamentales como el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Respecto a la naturaleza del derecho de la doble conformidad mencionó que es un recurso que no se encuentra habilitado taxativamente en la norma penal, pero subyace de confrontación de decisiones normativas en un criterio probatorio y de razonamiento de la ley, cuestión que implica el análisis a través del examen de razonamiento de la decisión de los jueces.

En ese sentido, se exponen tres problemáticas que el Proyecto de Ley debe resolver. El primero tiene que ver con la regulación de la figura de la prescripción, pues si no se regula adecuadamente, podrían desencadenarla en la finalización de procesos a favor del procesado simplemente por ejercerse el derecho consagrado. El segundo problema que debe tratarse es el hecho del superior jerárquico, pues en uso del principio del juez natural, se debería

cuestionar si es oportuno la creación de nuevas salas especializadas en conjunto con los juzgadores para resolver las impugnaciones especiales previendo la congestión judicial. El tercer problema a resolver tiene que ver con que, a pesar de la ausencia normativa, ya hay procesos que están intentando aplicar la figura de la doble conformidad, por lo que, no debería hacerse una remisión normativa de las normas de la apelación, sino debería regularse con totalidad.

Finalmente, el Observatorio concluye que se tienen que modificar las reglas de competencia de los tribunales y de los demás jueces penales por un tema de jerarquía.

Por su parte, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal toca cinco aspectos respecto de la doble conformidad que el proyecto de ley pretende tocar. El primero es que la doble conformidad es una figura que no se debe mezclar con los autos interlocutorios porque desnaturaliza la figura misma. Por lo tanto, esta figura debería contemplarse solo para sentencias condenatorias. El segundo aspecto, es sobre la forma de la notificación. El Instituto sostiene que no se tienen notificaciones asociadas a la lectura del fallo en el Código de Procedimiento Penal. En ese sentido, se encuentran ambigüedades y posiciones contradictorias en relación a la notificación porque no se sabe el momento desde el cual se cuenta la prescripción.

El tercer aspecto tiene que ver con la concurrencia del recurso de impugnación especial y el recurso extraordinario de casación. Se hace referencia a que, al día de hoy el reglamento de la Corte Suprema menciona que ambos recursos pueden coexistir, por lo que necesita una regulación sobre el tema vía legislativa para entender cuál es la oportunidad procesal para presentarlos con el objetivo de que el ciudadano pueda entender y no caer en la dicotomía de presentar uno u otro. El cuarto aspecto es relacionado a la precisión, pues en el artículo sexto y numeral 12 y el artículo 11 hablan de que el “acusado” puede ingresar a la casación, y pues no son los “acusados” quienes acuden a este recurso extraordinario. El quinto aspecto es que debería tenerse una disposición específica para la doble conformidad en la Ley 600. Eso implica hacer una pequeña modificación.

El doctor Juan David Romero en representación del Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo sostuvo que el proyecto de Ley no es solamente útil para incorporar los exhortos y recomendaciones, sino también para cumplir órdenes internacionales. En ese sentido, se resalta el papel de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la metodología para resolver y tramitar estos recursos, pero que eso no puede exonerar el papel del legislador de reglamentar la doble conformidad. En ese sentido, expone algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el caso Ruano Torres vs. el Salvador, Velez Loor vs Panamá, Mohamed vs. Argentina, Mendoza y otros versus Argentina, Liakat Alibux vs. Surinam, entre

otras donde se ha reconocido el derecho a la doble conformidad como una garantía mínima de todas las personas sometidas a investigaciones penales, y se han dado órdenes al Estado para incluirlo.

Sin embargo, hace énfasis en que la Corte Constitucional reconoció por primera vez el derecho a la doble conformidad en la Sentencia C-792 de 2014. En esa sentencia exhortó al Congreso a regular la materia. Desde este exhorto han pasado 10 años sin que se regulara integralmente el derecho a impugnar las sentencias condenatorias. También se hizo referencia que en el 2018 se promulgó el acto legislativo 01 de 2018 que creó las salas especiales de la Corte Suprema de Justicia y para garantizar la impugnación especial y la doble conformidad a aforados. Se resaltó que, hasta el día de hoy no se han expedido leyes para materializar este acto legislativo. Por lo que se mencionó que este proyecto puede ayudar.

Finalmente, se hizo referencia que, el mecanismo especial de impugnación no puede implicar alargar los tiempos en el proceso penal, pues en el proceso penal no solo se tienen que garantizar los derechos de las personas procesadas, sino también de las víctimas y de las presuntas víctimas. En este sentido, aumentar las competencias también debe tener en cuenta el derecho acceso a la justicia pronta, eficaz e imparcial en favor de las víctimas.

El doctor William Londoño manifiesta que, a pesar del esfuerzo del proyecto de ley, va a ser la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la que va a fijar el alcance de la eventual ley sancionada, por lo que es preciso el uso de algunos términos. En ese sentido, manifiesta que puede ser problemático permitir que los términos del recurso de impugnación especial se den al tiempo de los términos de la casación. También considera que puede haber una imprecisión al dejar que la interposición del recurso sea dentro de los 10 días siguientes al fallo, pues la regla general en la Ley 906 es la notificación por estrados, pero si la segunda instancia o los intervinientes no van a la audiencia de lectura del fallo, debería la ley desarrollar algo sobre eso, como un término perentorio de 5 días hábiles. También sugiere desarrollar la idea de conceder abogados de oficio para la interposición de este recurso.

Por su parte, el doctor Jorge Galeano, en representación de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia y, específicamente del grupo de investigación Minimalismo Penal Menos Delitos Menor Justicia, manifiesta que le corresponde al legislativo la regulación de la impugnación especial. En ese sentido, considera que, si bien la Jurisprudencia ha dado unas reglas importantes, estas reglas no son inamovibles y sí pueden ser eventualmente modificadas por el legislador, sobre todo porque esas reglas en algunas situaciones son contradictorias.

Lo primero que se cuestiona es que el recurso de impugnación especial por ninguna vía puede

transformarse en una tercera instancia. Sin embargo, también cuestiona que actualmente coexiste la impugnación especial con los recursos ordinarios y también con los extraordinarios. Por ese motivo, considera que es violatorio de todo tipo de garantías que se analice una sentencia sobre la que aún no se ha resuelto una impugnación especial.

Lo segundo que se menciona es que el proyecto no desarrolla cómo se va a armonizar las disposiciones de la Ley 906 de 2004 con la Ley 600 de 2000. En ese sentido, pone el ejemplo de que, sobre los demás aforados constitucionales que son juzgados bajo el régimen procesal de la Ley 600, no se ha desarrollado nada legalmente. De la misma manera, dice que el tema es de relevancia en un momento en el cual la Sala Penal de la Corte no se ha logrado poner de acuerdo. Lo tercero que se desarrolla es que se va a tener que plantear cuáles son las causales o técnica especial que debe dar el juez para la revisión, o si la revisión solo se tiene que basar en las razones de disenso. Por eso, se trae un problema a colación y es que las causales deben dejarse claro desde el mismo cuerpo normativo, como, en cuarto lugar, se debe dejar claro que un recurso extraordinario o el recurso de apelación deben o no continuar mientras se resuelve la impugnación especial.

En ese sentido, él considera que 30 días para presentar una impugnación especial es demasiado tiempo, por lo que propone el mismo tiempo para presentar la apelación, que son 5 días para el que lo presente, y 5 días para el traslado del no recurrente. También menciona que no debería aplicarse para los autos interlocutorios. Finalmente reflexiona sobre la importancia de la celeridad de una justicia que no lo es, por lo que, al generarse más situaciones, esto también va a tener repercusión e impactos.

El doctor Jorge Eduardo Páez Rodríguez considera que el proyecto de ley busca “absorber” legislativamente algo que ya existe en la práctica, por lo que, a la luz de los pronunciamientos, no existirían problemas de constitucionalidad. Lo que sí existe es una necesidad de tomar ese derecho, reconocerlo legalmente y regular el mismo de una manera precisa y detallada. Al ser un proyecto corto, considera que algunos artículos podrían suprimirse o unificarse. Siempre dándole un ámbito de movilidad a la judicatura para definir los aspectos más puntuales del trámite.

En relación al proyecto, el doctor sugiere cambiar algunos aspectos. En primer lugar, del artículo 2°, considera redundante y confuso el segundo inciso, por lo que sugiere cambiarlo. Del artículo 4°, sugiere eliminar que la impugnación especial procede contra los autos interlocutorios porque considera que desnaturaliza el recurso y es contradictorio a la totalidad del proyecto. En relación al artículo 5 sugiere la eliminación de un inciso para que se tome en consideración la situación de impugnación especial cuando se da a la Corte Suprema.

Sobre la concurrencia de recursos de apelación e impugnación especial, se menciona que la

impugnación especial no es de procedencia obligatoria, por lo que, ante la primera sentencia condenatoria en segunda instancia proceden ambos recursos. Además, no es necesario hacer una distinción entre los momentos para interponer el recurso de casación porque la Corte Suprema tiene la competencia e idoneidad para conocer de ambos recursos en una misma providencia. Sobre el artículo 12, en relación a la impugnación especial para aforados, sugiere tener en cuenta a los aforados descritos en el artículo 235 constitucional. Finalmente, manifiesta que debe estar de acuerdo con esta iniciativa legislativa.

El doctor Nicolás Castillo expresa un agradecimiento y agradece que se haya presentado el proyecto de ley. Menciona que hay cinco aspectos que deben ser incluidos en el proyecto de ley. Esos puntos son sobre:

- Vigencia temporal: De acuerdo a la Corte Constitucional, debe extenderse desde el 30 de enero de 2014. La Corte Interamericana condenó a Colombia en el caso *Arboleda Gómez vs. Colombia* el año pasado. Este pronunciamiento debe conducirnos a reabrir el debate de la vigencia de la garantía constitucional. Existen tres posiciones: una garantista, que implica reconocerla desde que Colombia ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos; otra más moderada que implica reconocerlo desde la Constitución de 1991; y otra que se ha desarrollado en los últimos años que es, a partir de los fallos de la Corte Interamericana, que es algo caprichoso. En su consideración, debe estudiarse un primer articulado sobre la vigencia temporal y extenderse hasta la Constitución de 1991, haciendo todos los ajustes legales a los que haya lugar.

- Reglas de prescripción: Actualmente, la Corte Suprema ha aplicado dos reglas de prescripción. El primer evento es cuando la primera sentencia condenatoria es proferida por el Tribunal, ahí la gran pregunta es si la regla de prescripción es la usada para resolver la casación, o si se extenderá el término de prescripción contemplado en la ley. En su criterio, debería aplicarse el término de la prescripción de los cinco años. El segundo evento es cuando la primera sentencia condenatoria sucede en sede de casación. Ahí debería aplicarse que la aplicación del artículo 189 está destinado para el procedimiento para resolver la casación y adicionalmente, se debe fijar un periodo de cinco años para fallar la impugnación especial.

- Naturaleza Jurídica (Oficio o rogado): Se manifiesta que la naturaleza debe ser oficiosa, pero si en el articulado se regulara su naturaleza política, se quedaría sin margen a interpretación hacia el futuro.

- Impugnación especial por delito y por sentencias: Se cuestiona qué pasaría en el caso en que haya varios delitos, y se decida condenar por uno y no por otro. En ese caso debería concederse también la impugnación especial, pues es necesario

que un juez también pueda referirse cuando se condena por primera vez por un delito y no por otro.

- Concurrencia entre casación e impugnación especial: Se sugiere que se reglamente un recurso de casación contra la sentencia que resuelva la impugnación especial. Esto permitiría que no se mezclen los temas. A pesar de la posición de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema, se podría colocar eso en el proyecto porque no está en contra de la libertad de configuración legislativa.

Por su parte, el doctor Eduardo Acosta manifestó la importancia del Acto Legislativo 01 del 2018 y el vacío legislativo que existe a día de hoy en el caso de los aforados constitucionales descritos en la Constitución Política, y cuyos casos son de conocimiento del Congreso de la República. Este tipo de procesos es llevado por la Ley 600 de 2000, y actualmente ha sido usados contra los exmagistrados Gustavo Malo y Leonidas Bustos. Se mencionó entonces, luego de un estudio normativo sobre las facultades de la Corte Suprema en este tipo de procesos, concluye que existe un prejuizamiento al aforado constitucional. Por lo que menciona la importancia de que el proyecto de ley también se refiera a estos casos.

En este sentido, se sugiere que, sobre la definición jurídica se refiera un magistrado de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, una vez la acusación del Congreso quede en firme; y en segunda instancia por parte de un magistrado de la Sala de Casación Penal. En relación a los términos para sustentar los recursos, se debe asimilar el término de sustentar el mismo al término de casación, independientemente de que no se rija a ninguna técnica. Otro aspecto a regular debe ser el de la libertad para la persona que es absuelta en primera instancia y condenada en segunda, pues a su juicio, este tema también debe ser regulado por el Congreso de la República, asimilándolo al artículo 86 de la Ley 600.

Finalmente, propone que se debe legislar sobre la facultad que tiene el defensor público para desistir de la interposición de los recursos. Si el defensor público va a desistir, debería explicar en primera instancia o en sede de revisión especial por qué desiste. También debería consultarle al acusado para que, en ejercicio de su defensa material manifieste si comparte la decisión del defensor público para materializar garantías penales.

El doctor Santiago Trespalcios considera que el proyecto es un esfuerzo legislativo adecuado y necesario en salvaguarda de la garantía de la doble conformidad. Manifiesta que los detalles enviados son de índole más estética y técnica para fortalecer el proyecto. Considera que los argumentos que se oponen a que se dé la garantía hacen parte de un “capitalismo a las garantías”, pues a la larga, las garantías son costosas, pero deben implementarse. Especialmente cuando se han incumplido desde hace tanto tiempo. Este incumplimiento se hace insostenible a la luz de la Constitución de 1991. Y

no existen argumentos para que esta garantía no se aplique.

En ese sentido, se considera que se deben extender los efectos del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal a los condenados por primera vez en segunda instancia y en casación. Cuando se intenta regular la impugnación especial a la sentencia condenatoria por primera vez en casación, el proyecto cae en dificultades logísticas y procedimentales. Debería tomarse una decisión respetuosa del sistema acusatorio que se debe resumir en que cuando haya una doble sentencia absolutoria, el fallo no sea susceptible para casación, como sucede en Estados Unidos, donde muchas veces ni se permite apelar el fallo absolutorio.

Cuando se habla de la coexistencia del recurso extraordinario de casación con la impugnación especial, el proyecto cae en una incorrección técnica. Esta es la de supeditar la presentación de un recurso ordinario a la admisión de un recurso extraordinario. En la práctica la Corte está demorando en admitir las casaciones cinco años, por lo que iría en contra del espíritu del proyecto de ser un recurso eficaz. En ese sentido, no se está de acuerdo en que uno se ponga luego de otro, se propone que ambos recursos se puedan colocar en paralelo, y, por lo tanto, ambos se puedan resolver en paralelo por medio de dos salas diferenciadas.

Sobre el objeto de la ley que, es adecuado, se está introduciendo un grado de consulta. El proyecto establece que cuando no se interponga la impugnación especial, pero sí sea procedente, se envíe a la Corte Suprema de Justicia. Si no existe ningún recurso no debería enviarse a la Corte, a no ser que se establezca que, cuando una sentencia admita la revisión especial, se pueda revisar automáticamente a la Corte. Pero esto debería estar establecido en el objeto.

Sobre el artículo segundo, se podría crear una dificultad para comprenderlo. No se comprende muy bien por qué la expresión “revisor” es ajena a la lógica procesal y tampoco se entiende muy bien el término “se entenderá otorgada la garantía”. Esto se puede cambiar con “a través de un recurso ordinario, accesible, efectivo e integral denominado impugnación especial”. Finalmente, no se deberían aclarar asuntos como que no existen causales taxativas, pues se puede prestar a malas interpretaciones.

El doctor Cristian Pereira del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia considera que el proyecto de ley es uno de los más importantes a tramitarse. Se tienen cuatro observaciones sobre el proyecto de ley:

Sobre el artículo segundo, se está dando una confusión respecto del acceso de la garantía de la doble conformidad. Se podría abrir la puerta de que las impugnaciones especiales puedan abrir la puerta para que se interpongan casaciones sobre las impugnaciones especiales. Esta confusión puede ser aprovechada para que, mediante una

modificación del artículo segundo sí proceda un recurso extraordinario de casación sobre la decisión que resuelva la impugnación especial. El tema ya se está tratando en la Corte Constitucional en la demanda con radicado D-16906, siendo ponente el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, y en el cual los demandantes cuestionan por qué no se puede recurrir en sede de casación la decisión que resuelve la impugnación especial. Incluso la Corte Suprema de Justicia con ponencia del magistrado Eider Patiño Cabrera en la providencia AP 1263 de 2019 del radicado 54215, indicó que sí era procedente el recurso extraordinario de casación frente a la providencia que resuelve la impugnación especial. En ese sentido, se puede suprimir el alcance, o se puede adicionar que sí procede recursos extraordinarios contra esa decisión.

Sobre el artículo cuarto que modifica el artículo 176 del Código de Procedimiento Penal, debería ser modificado en el entendido que la reposición y la apelación son concedidos como recursos ordinarios, pero la impugnación especial, derivada del derecho a la doble conformidad, debe ser tratado como tal, como una impugnación especial. Si bien es cierto que, el género y la especie se pueden parecer, es un recurso especial que debe tener presupuestos normativos claros para evitar confusiones respecto de su interposición y sustentación.

Frente al artículo cinco, el sistema oral acusatorio es un sistema de partes. En ese sentido, no se podría crear una sala especial de consulta, en el entendido de que la justicia penal es rogada, y podría favorecerse la desidia de defensores y procesados para suplir estas situaciones particulares. En casos particulares, como la asistencia de defensoría pública, se considera que sí debe estar bien argumentado en casos de desistimiento de interposición de recursos.

Finalmente, sobre la prescripción penal, es importante una reforma del artículo 189 de la Ley 906, se necesita una reforma para que las personas que interponen impugnaciones especiales no tengan que estar más de cinco años esperando a que se resuelva su situación jurídica. Es importante diferenciar la prescripción de la impugnación especial con otro tipo de prescripción.

El doctor David Vásquez considera que la impugnación especial es un recurso pro-reo. Sería un recurso panorámico, no sujeto a la técnica de la casación, con total libertad argumentativa. Si procede la casación oficiosa, el doctor considera que debería proceder la impugnación oficiosa en el sentido de que los aspectos deben ser abordados por total libertad por el fallador. Así como la Corte supera los aspectos técnicos y se concentra en los jurídicos, debería pasar lo mismo con la impugnación especial.

También se considera que se debería regular el desistimiento de los defensores públicos de recursos, pues si no fuera así, se vulnerarían derechos de las personas procesadas. No se está de acuerdo en que haya un trámite paralelo entre la impugnación especial y la casación, pues primero debería regularse

el recurso ordinario (impugnación especial) y luego el recurso extraordinario. Otro aspecto es sobre la regulación de la libertad de la persona condenada en segunda instancia, se menciona que el Congreso debería regular esa situación.

Por su parte, el doctor Gerardo Camilo Urbano en representación del Departamento de Derecho de la Universidad Externado de Colombia considera que existe un interés en que el proyecto sea aprobado. Esta garantía ha sido posible por la jurisprudencia, pero el Congreso debe regular sobre la materia. En ese sentido, hay algunos aspectos puntuales que se deberían regular y cambiar:

- Se debe aclarar el tema sobre la vigencia de la norma. Lo más garantista es que se reconociera que la garantía es aplicable desde la expedición de la Constitución de 1991. Sin embargo, también se considera que se deben tener en cuenta las dificultades logísticas que tendría la Corte Suprema al momento de regularlo.

- Se debe regular el aspecto de la prescripción, especialmente cuando la prescripción se da en concurrencia de recursos, es decir, cuando se planteen la casación y la impugnación especial al tiempo.

- Se debe eliminar la mención de que es un recurso carente de causales, pues es innecesario dado que se entiende como un recurso ordinario.

- Se debe regular que, al ser un recurso ordinario, no puede proceder de oficio. Por lo tanto, hay que eliminar la redacción que puede dar a entender que es un grado jurisdiccional de consulta, pues es un recurso ordinario.

- Se necesita una regulación explícita y adecuada de cómo se va a aplicar esta garantía en la Ley 600 que aún es vigente en casos de aforados constitucionales.

- Se debe replantear el tema de la concurrencia de recursos, pues es confuso y puede dar lugar a varias interpretaciones que no dan seguridad jurídica a los ciudadanos y a los operadores jurídicos. Lo más grave es sobre el tema de la conexidad, pues este concepto no es un límite ni una manera de interpretar las causales.

- No se puede condicionar la procedencia de la impugnación especial a la admisibilidad de la casación, pues esta puede durar cinco años.

- El término de la impugnación especial de diez días es adecuado, porque guarda más similitud con la apelación. Que se aumente en cinco días es razonable, especialmente cuando se condena por primera vez en segunda instancia.

- La segunda parte del artículo segundo es confusa.

- No puede proceder la impugnación especial para autos interlocutorios.

Finalmente, el doctor Carlos Guzmán considera que el proyecto es muy positivo para cumplir con las obligaciones internacionales. En ese sentido, sus comentarios, muy concretos son los siguientes:

- Es importante modificar el artículo segundo, pues debe ser claro que el recurso procede para las personas que son condenadas por primera vez.

- Se debe revisar la viabilidad de recursos ordinarios y extraordinarios con la doble conformidad.

- Se pueden recuperar las inexequibilidades de la modificación al artículo 32 que hizo la Ley 2098 de 2021 sobre las cuestiones oficiosas.

- Se podría modificar la audiencia de lectura del fallo. Pues esto es dispendioso y gasta tiempo, lo cual hace que las decisiones en el tiempo se dilaten. Se podría revisar cuáles decisiones no son susceptibles de lectura, incluyendo en las de segunda instancia.

- Un tema central es la aplicación retroactiva de esta garantía. Este es un tema central del proyecto en los que se puede debatir los términos, pero también los casos aplicables, entre otras cosas que se deben dejar positivizados, o si es un trámite cercano a la acción de revisión, que permitiría cuestionar la cosa juzgada y aspectos de seguridad jurídica.

5. CONFLICTO DE INTERÉS

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 291 de la Ley 5ª de 1992, modificado por la Ley 2003 de 2019, se indicarán las circunstancias o eventos que potencialmente pueden generar un conflicto de interés para los honorables Congresistas que discutan y decidan el presente proyecto de ley. De la misma manera, el artículo 286 de la norma mencionada, modificado a su vez por el artículo 1º de la Ley 2003 de 2019, define el conflicto de interés como la *“situación donde al discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo, o artículo pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo a favor del congresista”*.

De manera que esta iniciativa legislativa tiene carácter general pues establece la reforma a un procedimiento especial en procura de mejorar el mismo y hacerlo más eficiente de cara a las exigencias de la ciudadanía. Ningún provecho particular obtienen los Congresistas de la República al establecer las reglas bajo las cuales debe actuar la Comisión de Acusaciones, por lo que no se evidencia que las y los Congresistas puedan incurrir en eventuales conflictos de interés que les impida participar de la discusión y votación de este proyecto toda vez que no puede predicarse beneficio particular, actual y directo que se dé por la sola transformación del esquema procesal propio de los juicios contra aforados constitucionales.

7. PLIEGO DE MODIFICACIONES

Proyecto radicado	Ponencia para primer debate
Artículo 1º. Objeto: La presente ley desarrolla la garantía de doble conformidad judicial en materia penal, incorpora el recurso de impugnación especial al régimen procesal penal y dispone su presentación y trámite.	Artículo 1º. Objeto: La presente ley desarrolla la garantía de doble conformidad judicial en materia penal, incorpora el recurso de impugnación especial al régimen procesal penal y dispone su presentación y trámite.

Sin embargo, los Congresistas que para la fecha de discusión del proyecto sí cuenten con la calidad de condenados, por estar sujetos a la posibilidad de presentar recursos contra esa decisión, deben apartarse de la discusión y votación del proyecto.

Lo anterior sin perjuicio de que las y los Congresistas deban examinar en cada caso en concreto, la existencia de posibles hechos generadores de conflictos de interés, en cuyo caso deberán declararlos oportunamente de conformidad con el artículo 286 de la Ley 5ª de 1992.

6. IMPACTO FISCAL

Sobre el impacto fiscal de los proyectos de ley, indica la Ley 819 de 2003 *“por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”*, en su artículo séptimo, que *“el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”*, por lo que, en cumplimiento de dicho requisito, en este apartado se explica los motivos por los que la iniciativa no cuenta con ningún tipo de impacto fiscal.

Sobre el particular, es menester señalar que esta iniciativa legislativa no genera nuevos costos al Estado, pues solo positiviza un mecanismo procesal para los fines y en los términos que jurisprudencialmente ya funciona y no crea órganos, cargos u otro particular dentro de la rama judicial que implique erogaciones para el Estado.

Adicionalmente, debe resaltarse que la Corte Constitucional en las sentencias C-502 de 2007 y C-490 de 2011 ha señalado que el impacto fiscal no puede ser, en ningún caso, un obstáculo insuperable para el desarrollo de las propuestas legislativas, ni es necesariamente un requisito de trámite para la aprobación de los proyectos, así como tampoco puede constituirse en una barrera para ejercer las funciones legislativas de los Congresistas. En conclusión, la presente iniciativa no modifica de ninguna manera las finanzas públicas ni contraviene el marco fiscal de mediano plazo, pues no requiere recursos públicos para su desarrollo.

En los anteriores términos me permito sustentar la presente iniciativa legislativa;

Proyecto radicado	Ponencia para primer debate
Sin modificación	
<p>Artículo 2º. Acceso a la garantía de doble conformidad judicial: Todas las personas tienen derecho a recurrir la primera sentencia condenatoria proferida en su contra. Emitido el fallo del revisor se entenderá otorgada la garantía y contra el mismo solo procederán los recursos extraordinarios según lo determine la ley.</p>	<p>Artículo 2º. Acceso a la garantía de doble conformidad judicial: Todas las personas tienen derecho a recurrir la primera sentencia condenatoria proferida en su contra.</p>
<p>Justificación: Se elimina el término “revisor” porque no existe en la ley penal y puede generar confusiones. A su vez, se elimina la claridad de lo que procede una vez adoptada la decisión sobre el recurso porque esta está señalada en los artículos sobre procedencia de otros recursos extraordinarios.</p>	
<p>Artículo 3º. Modifíquese el artículo 32 de la Ley 906 de 2004 para que quede así:</p>	<p>Artículo 3º. Modifíquese el artículo 32 de la Ley 906 de 2004 para que quede así:</p>
<p>ARTÍCULO 32. DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.</p>	<p>ARTÍCULO 32. DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.</p>
<p>La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce:</p>	<p>La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce:</p>
<p>1. De la casación.</p>	<p>1. De la casación.</p>
<p>2. De la acción de revisión cuando la sentencia o la preclusión ejecutoriadas hayan sido proferidas en única o segunda instancia por esta corporación o por los tribunales.</p>	<p>2. De la acción de revisión cuando la sentencia o la preclusión ejecutoriadas hayan sido proferidas en única o segunda instancia por esta corporación o por los tribunales.</p>
<p>3. De la definición de competencia cuando se trate de aforados constitucionales y legales, o de tribunales, o de juzgados de diferentes distritos.</p>	<p>3. De la definición de competencia cuando se trate de aforados constitucionales y legales, o de tribunales, o de juzgados de diferentes distritos.</p>
<p>4. Del juzgamiento de los funcionarios a que se refieren los artículos 174 y 235 numeral 2 de la Constitución Política.</p>	<p>4. Del juzgamiento de los funcionarios a que se refieren los artículos 174 y 235 numeral 2 de la Constitución Política.</p>
<p>5. Del juzgamiento de los funcionarios a que se refiere el artículo 235 numeral 4 de la Constitución Política.</p>	<p>5. Del juzgamiento de los funcionarios a que se refiere el artículo 235 numeral 4 de la Constitución Política.</p>
<p>6. De la investigación y juzgamiento de los Senadores y Representantes a la Cámara.</p>	<p>6. De la investigación y juzgamiento de los Senadores y Representantes a la Cámara.</p>
<p>7. De las solicitudes de cambio de radicación de procesos penales de un distrito judicial a otro durante el juzgamiento.</p>	<p>7. De las solicitudes de cambio de radicación de procesos penales de un distrito judicial a otro durante el juzgamiento.</p>
<p>8. Del juzgamiento del viceprocurador, vicesfiscal, magistrados de los consejos seccionales de la judicatura, del Tribunal Superior Militar, del Consejo Nacional Electoral, fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y Tribunales, Procuradores Delegados, Procuradores Judiciales II, Registrador Nacional del Estado Civil, Director Nacional de Fiscalía y Directores Seccionales de Fiscalía.</p>	<p>8. Del juzgamiento del viceprocurador, vicesfiscal, magistrados de los consejos seccionales de la judicatura, del Tribunal Superior Militar, del Consejo Nacional Electoral, fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y Tribunales, Procuradores Delegados, Procuradores Judiciales II, Registrador Nacional del Estado Civil, Director Nacional de Fiscalía y Directores Seccionales de Fiscalía.</p>
<p><u>9. Del recurso de impugnación especial interpuesto contra la primera sentencia condenatoria proferida en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Distrito o por la Corte Suprema de Justicia en sede del recurso de casación o apelación.</u></p>	<p><u>9. Del recurso de impugnación especial interpuesto contra la primera sentencia condenatoria proferida en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Distrito o por la Corte Suprema de Justicia en sede del recurso de casación o apelación.</u></p>
<p>PARÁGRAFO. Cuando los funcionarios a los que se refieren los numerales 5, 6 y 8 anteriores hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos, el fuero solo se mantendrá para los delitos que tengan relación con las funciones desempeñadas.</p>	<p>PARÁGRAFO. Cuando los funcionarios a los que se refieren los numerales 5, 6 y 8 anteriores hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos, el fuero solo se mantendrá para los delitos que tengan relación con las funciones desempeñadas.</p>
<p>Sin modificaciones.</p>	

Proyecto radicado	Ponencia para primer debate
<p>Artículo 4º. Modifíquese el artículo 176 de la Ley 906 de 2004 para que quede así:</p> <p>ARTÍCULO 176. RECURSOS ORDINARIOS: Son recursos ordinarios la reposición, la apelación y la impugnación especial.</p> <p>Salvo la sentencia la reposición procede para todas las decisiones y se sustenta y resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia.</p> <p>La apelación procede, salvo los casos previstos en este código, contra los autos adoptados durante el desarrollo de las audiencias, y contra la sentencia condenatoria o absolutoria.</p> <p>La impugnación especial procede contra los autos interlocutorios y la primera sentencia condenatoria, sea esta proferida en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Distrito o por la Corte Suprema de Justicia en sede de los recursos de casación o apelación.</p>	<p>Artículo 4º. Modifíquese el artículo 176 de la Ley 906 de 2004 para que quede así:</p> <p>ARTÍCULO 176. RECURSOS ORDINARIOS: Son recursos ordinarios la reposición, la apelación y la impugnación especial.</p> <p>Salvo la sentencia la reposición procede para todas las decisiones y se sustenta y resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia.</p> <p>La apelación procede, salvo los casos previstos en este código, contra los autos adoptados durante el desarrollo de las audiencias, y contra la sentencia condenatoria o absolutoria.</p> <p>La impugnación especial procede contra los autos interlocutorios y la primera sentencia condenatoria, sea esta proferida en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Distrito o por la Corte Suprema de Justicia en sede de los recursos de casación o apelación.</p>
<p>Justificación: Se elimina la procedencia del recurso contra autos por superar el ámbito de garantía de la doble conformidad tal como lo recomendaron varios de los intervinientes en la audiencia, además no se usa lenguaje propio de normas del derecho civil y se cierra esa posibilidad a la que se ha hecho referencia en varios autos proferidos por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.</p>	
<p>Artículo 5º. Créase el artículo 178A en la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 178A. TRÁMITE DEL RECURSO DE IMPUGNACIÓN ESPECIAL. El recurso se interpondrá en la audiencia de lectura de fallo de que trata el inciso tercero del artículo 179 de esta ley y se sustentará dentro de los diez (10) días siguientes, se correrá traslado a los no recurrentes en los tres (3) días siguientes, para que en un término de cinco (5) días se pronuncien. Si el interesado no interpusiera el recurso y fuera procedente, le corresponderá a la autoridad judicial competente remitir el proceso a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.</p> <p>El recurso de impugnación especial estará desprovisto de causales o técnica especial alguna, en el mismo deberán señalarse las razones del disenso contra el fallo condenatorio y estas constituirán el límite del juez superior para resolver.</p> <p>Realizado el reparto en la Corte Suprema de Justicia, el Magistrado ponente cuenta con veinte días para registrar proyecto y diez la Sala para su estudio y decisión. El fallo será leído en audiencia dentro de los diez días siguientes a su aceptación por la sala.</p>	<p>Artículo 5º. Créase el artículo 178A en la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 178A. TRÁMITE DEL RECURSO DE IMPUGNACIÓN ESPECIAL. El recurso se interpondrá en la audiencia de lectura de fallo de que trata el inciso tercero del artículo 179 de esta ley y se sustentará dentro de los diez (10) días siguientes, se correrá traslado a los no recurrentes en los tres (3) días siguientes, para que en un término de cinco (5) días se pronuncien. Si el interesado no interpusiera el recurso y fuera procedente, le corresponderá a la autoridad judicial competente remitir el proceso a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.</p> <p>El recurso de impugnación especial estará desprovisto de causales o técnica especial alguna, en el mismo deberán señalarse las razones del disenso contra el fallo condenatorio y estas constituirán el límite del juez superior para resolver.</p> <p>Realizado el reparto en la Corte Suprema de Justicia, el Magistrado ponente cuenta con treinta días para registrar proyecto y veinte la Sala para su estudio y decisión. El fallo será leído en audiencia dentro de los diez días siguientes a su aceptación por la sala.</p>
<p>Justificación: Se elimina la remisión al artículo 179 porque esa norma hace referencia al trámite del recurso de apelación del que conocen los tribunales, de manera que si la impugnación especial solo es pasible de ser interpuesta en esa oportunidad se estaría excluyendo la que procede contra la primera sentencia condenatoria proferida por la Corte Suprema de Justicia.</p> <p>Igualmente, se elimina la competencia oficiosa o grado jurisdiccional de consulta que se estaba imponiendo a quien emitiera la primera sentencia condenatoria. En el sistema acusatorio actual no existe tal disposición para el recurso de apelación ni para ningún otro recurso, pues el recurso, para tener tal naturaleza debe ser interpuesto por el interesado manifestando las razones del disenso con la providencia contra la que se dirige.</p>	

Proyecto radicado	Ponencia para primer debate
<p>Artículo 6°. Créase el artículo 178B en la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 178B. CONCURRENCIA DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN Y DE IMPUGNACIÓN ESPECIAL CONTRA UNA MISMA SENTENCIA: Cuando en una sentencia proferida en segunda instancia se condene por primera vez respecto de una o varias conductas típicas y a la vez se confirme la condena impuesta en primera instancia respecto de otra u otras conductas típicas; se seguirán las siguientes reglas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Frente a la condena impuesta por primera vez en segunda instancia procede para el condenado o su defensor el recurso de impugnación especial. 2. Al acusado o su defensor solamente les es dable recurrir simultáneamente en casación en hipótesis de delitos conexos respecto de los cuales se ha declarado la responsabilidad penal del procesado en primera y segunda instancia. 3. Si además de la impugnación especial promovida por el acusado o su defensor, otro sujeto procesal o interviniente promovió casación, la Corte procederá primero, a calificar la demanda de casación. 4. Resuelta la impugnación especial y notificada en audiencia de lectura de fallo empezará a correr el término para el acusado o su defensor para presentar el recurso de casación respecto de los delitos no conexos. 	<p>Artículo 6°. Créase el artículo 178B en la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 178B. CONCURRENCIA DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN DE CASACIÓN Y DE IMPUGNACIÓN ESPECIAL CONTRA UNA MISMA SENTENCIA: Cuando en una sentencia proferida en segunda instancia se condene por primera vez respecto de una o varias conductas típicas <u>uno o varios delitos</u> y a la vez se confirme la condena impuesta en primera instancia respecto de otra u otras conductas típicas <u>otro u otros delitos</u>, se seguirán <u>aplicarán</u> las siguientes reglas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Frente a la condena impuesta por primera vez en segunda instancia procede para el condenado o su defensor el recurso de impugnación especial. 2. Al defensor del condenado solamente le es dable recurrir simultáneamente en casación en hipótesis de delitos conexos <u>juzgados</u> en el mismo proceso respecto de los cuales se ha declarado la responsabilidad penal del procesado en primera y segunda instancia. 3. Si además de la impugnación especial promovida por el acusado o su defensor, otro sujeto procesal o interviniente promovió casación, la Corte procederá primero, a calificar la demanda de casación <u>resolver la impugnación especial</u>. 4. Resuelta la impugnación especial y notificada en audiencia de lectura de fallo empezará a correr el término para el acusado o su defensor para presentar el recurso de casación respecto de los delitos no conexos <u>para los cuales aún no lo hubiera presentado</u>.
<p>Justificación: Se corrige el yerro de incluir el recurso de apelación cuando hay imposibilidad jurídica de que este concorra con el de impugnación especial. El que sí debe quedar incluido es el recurso extraordinario de casación.</p> <p>Se modifica la categoría de “delitos conexos” por delitos juzgados en un mismo proceso para evitar imprecisiones.</p> <p>Se modifica el numeral tercero para que primero se resuelva la impugnación especial y posteriormente se califique la demanda de casación, si no, se estaría supeditando el trámite de un recurso ordinario (impugnación especial) al de uno extraordinario (casación).</p> <p>Se mejora la redacción en el numeral cuarto a efectos de que sea comprensible que la oportunidad del defensor para presentar el recurso de casación por los delitos que aún no se hubiera presentado empezará a correr una vez notificada la providencia en estrados. Igualmente se excluye la posibilidad del condenado de presentar por sí mismo la demanda de casación pues esta tiene una técnica establecida que requiere de profesional del derecho para presentarse.</p>	
<p>Artículo 7°. Créase el artículo 178C en la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 178C. PRINCIPIO DE JUEZ IMPARCIAL EN EL RECURSO DE IMPUGNACIÓN ESPECIAL. Para garantizar el principio de juez imparcial la Sala de Casación Penal determinará en su reglamento su división en subsalas en caso de que deba conocer de demanda de casación o recurso de apelación y del recurso de impugnación especial dentro del mismo proceso.</p>	<p>Artículo 7°. Créase el artículo 178C en la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 178C. PRINCIPIO DE JUEZ IMPARCIAL EN EL RECURSO DE IMPUGNACIÓN ESPECIAL. Para garantizar el principio de juez imparcial la Sala de Casación Penal determinará en su reglamento su división en subsalas en caso de que deba conocer de demanda de casación o recurso de apelación y del recurso de impugnación especial dentro del mismo proceso.</p>
<p>Sin modificaciones.</p>	
<p>Artículo 8°. Modifíquese el artículo 179B de la Ley 906 de 2004 para que quede así:</p> <p>ARTÍCULO 179B. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE QUEJA. Cuando el funcionario de primera instancia deniegue el recurso de apelación y/o el de impugnación especial, el recurrente podrá interponer el de queja dentro del término de ejecutoria de la decisión que deniega el recurso.</p>	<p>Artículo 8°. Modifíquese el artículo 179B de la Ley 906 de 2004 para que quede así:</p> <p>ARTÍCULO 179B. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE QUEJA. Cuando el funcionario de primera instancia deniegue el recurso de apelación o el de impugnación especial, el recurrente podrá interponer el de queja dentro del término de ejecutoria de la decisión que deniega el recurso.</p>

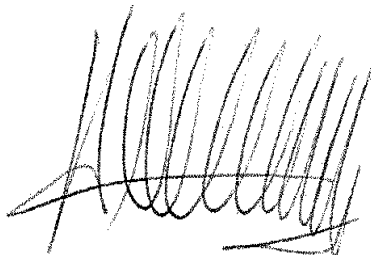
Proyecto radicado	Ponencia para primer debate
<p>Justificación: Solo se modifica la palabra y porque que activan el recurso de queja.</p>	<p>ya está incluida en la o respecto de los recursos negados</p>
<p>Artículo 9º. Modifíquese el artículo 179C de la Ley 906 de 2004 para que quede así:</p> <p>ARTÍCULO 179C. INTERPOSICIÓN. Negado el recurso de apelación <u>y/</u> o el de <u>impugnación especial</u>, el interesado solicitará copia de la providencia impugnada y de las demás piezas pertinentes, las cuales se compulsarán dentro del improrrogable término de un (1) día y se enviarán inmediatamente al superior.</p>	<p>Artículo 9º. Modifíquese el artículo 179C de la Ley 906 de 2004 para que quede así:</p> <p>ARTÍCULO 179C. INTERPOSICIÓN. Negado el recurso de apelación <u>y/o</u> el de <u>impugnación especial</u>, el interesado solicitará copia de la providencia impugnada y de las demás piezas pertinentes, las cuales se compulsarán dentro del improrrogable término de un (1) día y se enviarán inmediatamente al superior.</p>
<p>Justificación: Solo se modifica la palabra y porque que activan el recurso de queja.</p>	<p>ya está incluida en la o respecto de los recursos negados</p>
<p>Artículo 10. Modifíquese el artículo 179E de la Ley 906 de 2004 para que quede así:</p> <p>ARTÍCULO 179E. DECISIÓN DEL RECURSO. Si el superior concede la apelación <u>y/</u> o la <u>impugnación especial</u>, determinará el efecto que le corresponda y comunicará su decisión al inferior.</p>	<p>Artículo 10. Modifíquese el artículo 179E de la Ley 906 de 2004 para que quede así:</p> <p>ARTÍCULO 179E. DECISIÓN DEL RECURSO. Si el superior concede la apelación <u>y/o</u> la <u>impugnación especial</u>, determinará el efecto que le corresponda y comunicará su decisión al inferior.</p>
<p>Justificación: Solo se modifica la palabra y porque que activan el recurso de queja.</p>	<p>ya está incluida en la o respecto de los recursos negados</p>
<p>Artículo 11. Modifíquese el artículo 183 de la Ley 906 de 2004 para que quede así:</p> <p>ARTÍCULO 183. OPORTUNIDAD. El recurso se interpondrá ante el Tribunal dentro de los cinco (5) días siguientes a la última notificación y en un término posterior común de treinta (30) días se presentará la demanda que de manera precisa y concisa señale las causales invocadas y sus fundamentos.</p> <p>Si no se presenta la demanda dentro del término señalado se declara desierto el recurso, mediante auto que admite el recurso de reposición.</p> <p>En el evento de que el acusado o su defensor hayan presentado recurso de impugnación especial, el término para interponer el recurso extraordinario de casación por delitos no conexos-empezará a correr desde la audiencia de lectura de fallo.</p>	<p>Artículo 11. Modifíquese el artículo 183 de la Ley 906 de 2004 para que quede así:</p> <p>ARTÍCULO 183. OPORTUNIDAD. El recurso se interpondrá ante el Tribunal dentro de los cinco (5) días siguientes a la última notificación y en un término posterior común de treinta (30) días se presentará la demanda que de manera precisa y concisa señale las causales invocadas y sus fundamentos.</p> <p>Si no se presenta la demanda dentro del término señalado se declara desierto el recurso, mediante auto que admite el recurso de reposición.</p> <p>En el evento de que el acusado o su defensor hayan presentado recurso de impugnación especial, el término para interponer el recurso extraordinario de casación para los delitos no conexos por los cuales aún no lo hubieran presentado empezará a correr desde la audiencia de lectura de fallo.</p>
<p>Justificación: Se armoniza con lo dispuesto en el artículo 6 sobre las reglas de concurrencia de los recursos ordinario de impugnación especial y extraordinario de casación.</p>	<p>ya está incluida en la o respecto de los recursos negados</p>
<p>Artículo 12. Ejercicio de la impugnación especial para aforados: Los aforados constitucionales de los que tratan los numerales 3, 4 y 5 del artículo 235 de la Constitución Política, así como los aforados legales señalados en el artículo 32 numeral 8 de la Ley 906 de 2004, serán juzgados por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Casación Penal se dividirá en dos subsalas para conocer la primera del recurso de apelación y la segunda del recurso de impugnación especial si este resultare procedente.</p> <p>Parágrafo: El recurso será procedente sin observancia de que el proceso se tramite bajo el régimen procesal de la Ley 600 de 2000 o la Ley 906 de 2004.</p>	<p>Artículo 12. Ejercicio de la impugnación especial para aforados: Los aforados constitucionales de los que tratan los numerales 3, 4 y 5 del artículo 235 de la Constitución Política, así como los aforados legales señalados en el artículo 32 numeral 8 de la Ley 906 de 2004 serán juzgados por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Casación Penal se dividirá en dos subsalas para conocer la primera del recurso de apelación y la segunda del recurso de impugnación especial si este resultare procedente. <u>tienen derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria sin importar la instancia en la que esta se profiera, para lo cual la Sala de Casación Penal se dividirá en salas de decisión conformadas por tres (03) magistrados con el objetivo de conocer los eventuales recursos de apelación, impugnación y casación garantizando el principio de imparcialidad judicial.</u></p> <p>Parágrafo: El recurso será procedente sin observancia de que el proceso se tramite bajo el régimen procesal de la Ley 600 de 2000 o la Ley 906 de 2004.</p>

Proyecto radicado	Ponencia para primer debate
<p>Justificación: Se modifica el artículo para que la sala de casación penal no se divida en dos subsalas de decisión sino en tres, con el fin de que se pueda garantizar su imparcialidad en las tres formas en que puede participar dentro del proceso: resolviendo la apelación, la impugnación especial y la casación.</p>	
	<p>Artículo 13. (artículo nuevo) Modifíquese el artículo 185 de la Ley 906 de 2004 para que quede así:</p> <p>Cuando la Corte aceptare como demostrada alguna de las causales propuestas, dictará el fallo dentro de los sesenta (60) días siguientes a la audiencia de sustentación, <u>contra el cual únicamente procede recurso de impugnación especial para el condenado si en sede de casación se le condenó por primera vez.</u> Frente a los demás sujetos procesales no procede ningún recurso ni acción, salvo la de revisión.</p> <p>La Corte está facultada para señalar en qué estado queda el proceso en el caso de determinar que este pueda recuperar alguna vigencia. En caso contrario procederá a dictar el fallo que corresponda.</p> <p>Cuando la Corte adopte el fallo, dentro del mismo lapso o a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes, citará a audiencia para lectura del mismo.</p>
<p>Artículo 13. Derogatorias y vigencias: La presente ley empezará a regir a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.</p>	<p>Artículo 13 14. Derogatorias y vigencias: La presente ley empezará a regir a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.</p>
<p>Justificación: Se ajusta numeración por artículo nuevo.</p>	

8. PROPOSICIÓN

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, solicito a los miembros de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes dar primer debate al Proyecto de Ley número 409 de 2024 Cámara, “*por medio de la cual se modifica la Ley 906 de 2004, se reglamenta la garantía procesal de doble conformidad judicial, se regula el recurso de impugnación especial y se dictan otras disposiciones*” de acuerdo con el texto propuesto.

Atentamente,



ALIRIO URIBE MUÑOZ

Ponente Único

9. TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE

PROYECTO DE LEY NÚMERO 409 DE 2024 CÁMARA

por medio de la cual se modifica la Ley 906 de 2004, se reglamenta la garantía procesal de doble conformidad judicial, se regula el recurso de impugnación especial y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. Objeto: La presente ley desarrolla la garantía de doble conformidad judicial en materia penal, incorpora el recurso de impugnación especial al régimen procesal penal y dispone su presentación y trámite.

Artículo 2º. Acceso a la garantía de doble conformidad judicial: Todas las personas tienen derecho a recurrir la primera sentencia condenatoria proferida en su contra.

Artículo 3º. Modifíquese el artículo 32 de la Ley 906 de 2004 para que quede así:

ARTÍCULO 32. DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce:

1. De la casación.
2. De la acción de revisión cuando la sentencia o la preclusión ejecutoriadas hayan sido proferidas en única o segunda instancia por esta corporación o por los tribunales.
3. De la definición de competencia cuando se trate de aforados constitucionales y legales, o de tribunales, o de juzgados de diferentes distritos.
4. Del juzgamiento de los funcionarios a que se refieren los artículos 174 y 235 numeral 2 de la Constitución Política.
5. Del juzgamiento de los funcionarios a que se refiere el artículo 235 numeral 4 de la Constitución Política.

6. De la investigación y juzgamiento de los Senadores y Representantes a la Cámara.

7. De las solicitudes de cambio de radicación de procesos penales de un distrito judicial a otro durante el juzgamiento.

8. Del juzgamiento del viceprocurador, vicesfiscal, magistrados de los consejos seccionales de la judicatura, del Tribunal Superior Militar, del Consejo Nacional Electoral, fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y Tribunales, Procuradores Delegados, Procuradores Judiciales II, Registrador Nacional del Estado Civil, Director Nacional de Fiscalía y Directores Seccionales de Fiscalía.

9. Del recurso de impugnación especial interpuesto contra la primera sentencia condenatoria proferida en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Distrito o por la Corte Suprema de Justicia en sede del recurso de casación o apelación.

PARÁGRAFO. Cuando los funcionarios a los que se refieren los numerales 5, 6 y 8 anteriores hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos, el fuero solo se mantendrá para los delitos que tengan relación con las funciones desempeñadas.

Artículo 4º. Modifíquese el artículo 176 de la Ley 906 de 2004 para que quede así:

ARTÍCULO 176. RECURSOS ORDINARIOS:

Son recursos ordinarios la reposición, la apelación y la impugnación especial.

Salvo la sentencia la reposición procede para todas las decisiones y se sustenta y resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia.

La apelación procede, salvo los casos previstos en este código, contra los autos adoptados durante el desarrollo de las audiencias, y contra la sentencia condenatoria o absolutoria.

La impugnación especial procede contra la primera sentencia condenatoria, sea esta proferida en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Distrito o por la Corte Suprema de Justicia en sede de los recursos de casación o apelación.

Artículo 5º. Créase el artículo 178A en la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:

ARTÍCULO 178A. TRÁMITE DEL RECURSO DE IMPUGNACIÓN ESPECIAL. El recurso se interpondrá en la audiencia de lectura de fallo, se sustentará dentro de los diez (10) días siguientes, se correrá traslado a los no recurrentes en los tres (3) días siguientes, para que en un término de cinco (5) días se pronuncien.

El recurso de impugnación especial estará desprovisto de causales o técnica especial alguna, en el mismo deberán señalarse las razones del disenso contra el fallo condenatorio y estas constituirán el límite del juez superior para resolver.

Realizado el reparto en la Corte Suprema de Justicia, el Magistrado ponente cuenta con treinta días para registrar proyecto y veinte la Sala para su estudio y decisión. El fallo será leído en audiencia

dentro de los diez días siguientes a su aceptación por la sala.

Artículo 6º. Créase el artículo 178 B en la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:

ARTÍCULO 178B. CONCURRENCIA DE LOS RECURSOS ~~DE APELACIÓN DE CASACIÓN~~ Y DE IMPUGNACIÓN ESPECIAL CONTRA UNA MISMA SENTENCIA: Cuando en una sentencia proferida en segunda instancia se condene por primera vez respecto de uno o varios delitos y a la vez se confirme la condena impuesta en primera instancia respecto de otro u otros delitos, se aplicarán las siguientes reglas:

1. Frente a la condena impuesta por primera vez en segunda instancia procede para el condenado o su defensor el recurso de impugnación especial.

2. Al defensor del condenado solamente le es dable recurrir simultáneamente en casación en hipótesis de delitos juzgados en el mismo proceso respecto de los cuales se ha declarado la responsabilidad penal del procesado en primera y segunda instancia.

3. Si además de la impugnación especial promovida por el acusado o su defensor, otro sujeto procesal o interviniente promovió casación, la Corte procederá primero, a resolver la impugnación especial.

4. Resuelta la impugnación especial y notificada en audiencia de lectura de fallo empezará a correr el término para el defensor para presentar el recurso de casación respecto de los delitos para los cuales aún no lo hubiera presentado.

Artículo 7º. Créase el artículo 178 C en la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:

ARTÍCULO 178C. PRINCIPIO DE JUEZ IMPARCIAL EN EL RECURSO DE IMPUGNACIÓN ESPECIAL. Para garantizar el principio de juez imparcial la Sala de Casación Penal determinará en su reglamento su división en subsalas en caso de que deba conocer de demanda de casación o recurso de apelación y del recurso de impugnación especial dentro del mismo proceso.

Artículo 8º. Modifíquese el artículo 179B de la Ley 906 de 2004 para que quede así:

ARTÍCULO 179B. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE QUEJA. Cuando el funcionario de primera instancia deniegue el recurso de apelación o el de impugnación especial, el recurrente podrá interponer el de queja dentro del término de ejecutoria de la decisión que deniega el recurso.

Artículo 9º. Modifíquese el artículo 179C de la Ley 906 de 2004 para que quede así:

ARTÍCULO 179C. INTERPOSICIÓN. Negado el recurso de apelación o el de impugnación especial, el interesado solicitará copia de la providencia impugnada y de las demás piezas pertinentes, las cuales se compulsarán dentro del improrrogable término de un (1) día y se enviarán inmediatamente al superior.

Artículo 10. Modifíquese el artículo 179E de la Ley 906 de 2004 para que quede así:

ARTÍCULO 179E. DECISIÓN DEL RECURSO. Si el superior concede la apelación o la impugnación especial, determinará el efecto que le corresponda y comunicará su decisión al inferior.

Artículo 11. Modifíquese el artículo 183 de la Ley 906 de 2004 para que quede así:

ARTÍCULO 183. OPORTUNIDAD. El recurso se interpondrá ante el Tribunal dentro de los cinco (5) días siguientes a la última notificación y en un término posterior común de treinta (30) días se presentará la demanda que de manera precisa y concisa señale las causales invocadas y sus fundamentos.

Si no se presenta la demanda dentro del término señalado se declara desierto el recurso, mediante auto que admite el recurso de reposición.

En el evento de que el acusado o su defensor hayan presentado recurso de impugnación especial, el término para interponer el recurso extraordinario de casación para los delitos ~~no conexos~~ por los cuales aún no lo hubieran presentado empezará a correr desde la audiencia de lectura de fallo

Artículo 12. Ejercicio de la impugnación especial para aforados: Los aforados constitucionales de los que tratan los numerales 3, 4 y 5 del artículo 235 de la Constitución Política, así como los aforados legales señalados en el artículo 32 numeral 8 de la Ley 906 de 2004 tienen derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria sin importar la instancia en la que esta se profiera, para lo cual la Sala de Casación Penal se dividirá en salas de decisión conformadas por tres (03) magistrados con el objetivo de conocer los eventuales recursos de apelación, impugnación y casación garantizando el principio de imparcialidad judicial.

Parágrafo: El recurso será procedente sin observancia de que el proceso se tramite bajo el régimen procesal de la Ley 600 de 2000 o la Ley 906 de 2004.

Artículo 13. Modifíquese el artículo 185 de la Ley 906 de 2004 para que quede así:

Artículo 185: Cuando la Corte aceptare como demostrada alguna de las causales propuestas, dictará el fallo dentro de los sesenta (60) días

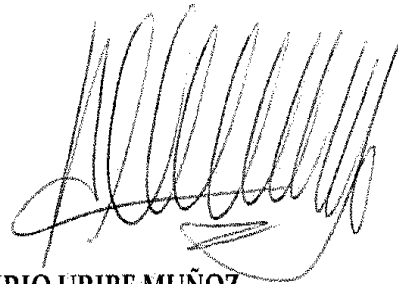
siguientes a la audiencia de sustentación, contra el cual únicamente procede recurso de impugnación especial para el condenado si en sede de casación se le condenó por primera vez. Frente a los demás sujetos procesales no procede ningún recurso ni acción, salvo la de revisión.

La Corte está facultada para señalar en qué estado queda el proceso en el caso de determinar que este pueda recuperar alguna vigencia. En caso contrario procederá a dictar el fallo que corresponda.

Cuando la Corte adopte el fallo, dentro del mismo lapso o a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes, citará a audiencia para lectura del mismo.

Artículo 14. Derogatorias y vigencias: La presente ley empezará a regir a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Atentamente



ALIRIO URIBE MUÑOZ

Ponente Único

CONTENIDO

Gaceta número 279 - jueves, 13 de marzo de 2025	
CÁMARA DE REPRESENTANTES	
PROYECTOS DE LEY	
	Págs.
Proyecto de ley número 524 de 2025 Cámara, por medio del cual se establece el Sistema Integrado de Control de exenciones del 4x1000 y se dictan otras disposiciones.....	1
PONENCIAS	
Informe de ponencia positiva para primer debate texto propuesto al proyecto de ley número 409 de 2024 Cámara, por medio de la cual se modifica la Ley 906 de 2004, se reglamenta la garantía procesal de doble conformidad judicial, se regula el recurso de impugnación especial y se dictan otras disposiciones.....	7